DERECHO POLITICO II

“Comentario al Real Decreto-Ley 20/1977 sobre normas electorales”,

SUMARIO

- I. Introducción.—II. Características generales del sufragio.** 1.º *Universal*: Inelegibilidades e incompatibilidades. 2.º *Directo*. 3.º *Secreto*. 4.º *Igual*. 5.º *Libre*. 6.º *Personal*. 7.º *Plurinominal*.—**III. La distribución del territorio.—IV. Los sistemas electorales.** 1. *El Senado*: Sistema mayoritario de voto limitado. 2. *El Congreso*: Sufragio proporcional, sistema de V. d'Hondt.—**V. La Administración electoral.—VI. El procedimiento electoral.** 1. *Convocatoria*. 2. *Constitución de las Juntas Electorales*. 3. *Determinación de las Secciones Electorales*. 4. *Presentación de candidatos*. 5. *Proclamación de candidatos*. 6. *Campaña electoral*. 7. *Constitución de las Mesas*. 8. *Votación*. 9. *Escrutinio*.—**VII. El Contencioso electoral.—VIII. Los delitos electorales.—IX. Conclusión.**

I. Introducción

La Ley para la Reforma Política de 4 de enero de 1977, autorizó al Gobierno en su disposición transitoria primera para regular las elecciones de las nuevas Cortes que dicha Ley Fundamental creaba. Consecuencia de tal autorización es el Real Decreto-Ley 20/1977 de 18 de marzo ("B.O.E." del 23 de marzo), cuyas líneas generales se pretenden exponer a continuación; se intenta así con este comentario suplir la publicación íntegra de dicha norma en la Sección legislativa, pues su extensión y complejidad lo desaconseja; por otra parte, es necesario tener en cuenta que se trata de una norma cuya vigencia queda limitada a la regulación de las primeras elecciones legislativas, no teniendo, por tanto, una dimensión de futuro.

A efectos de las Unidades Didácticas, el presente comentario amplía las modificaciones introducidas por la Ley para la Reforma Política en Derecho Político II y que fueron recogidas en el número 0 de este Boletín; para una mejor comprensión de lo aquí expuesto, sería conveniente que el alumno relejera los temas XVIII, XIX y XX de las Unidades Didácticas de Derecho Político I, donde se explican las líneas generales del Derecho Electoral.

Como ya se indicó (ver el Boletín número 0, pág. 9), la Ley para la Reforma Política modifica los Principios inspiradores del Régimen Político contenido en las Leyes Fundamentales, en lo referente a la representación política, al abandonar el principio orgánico y sustituirle por el sufragio inorgánico, propio de los ordenamientos democráticos liberales; principios que se incorporan a nuestro derecho según el artículo primero de la citada Ley.

El Decreto-Ley sobre normativa electoral regula de forma unitaria los distintos aspectos relativos a las elecciones legislativas, y, desde el punto de vista formal, consta de Exposición de Motivos, noventa y dos artículos distribuidos en ocho títulos (disposiciones generales, organización electoral, convocatoria de elecciones, presentación y proclamación de candidatos, campaña electoral, procedimiento electoral, reclamaciones electorales y delitos e infracciones electorales), cinco disposiciones transitorias y cuatro finales.

El rango normativo dado a la disposición (Decreto-Ley) le permite derogar explícitamente la Ley Electoral de 8 de agosto de 1907 y la Ley de Incompatibilidades de 31 de julio de 1975, así como deslegalizar las demás normas con rango de Ley en lo que se opongan a ella. Según la disposición final primera, “Se autoriza al Gobierno para dictar las disposiciones necesarias para el cumplimiento de las presentes normas”.

Para una mejor exposición vamos a distinguir los siguientes apartados: Características generales del sufragio: inelegibilidades e incompatibilidades; distribución del territorio; sistemas electorales; la administración electoral; el procedimiento electoral; el contencioso electoral; los delitos electorales; por último, resumiremos lo más destacable de dichas normas en unas breves conclusiones.

II. Características generales del sufragio

Por imperativo de la Ley para la Reforma Política, el sufragio en nuestro derecho pasa a ser universal, directo y secreto (artículo 2.º, 2 para las elecciones al Congreso de los Diputados, y disposición transitoria primera para las elecciones al Senado). La normativa electoral desarrolla estas características del sufragio, además, regulándole como personal, igual, libre y plurinominal. Veamos por separado cada una de estas notas.

1.º Universal. El carácter universal del sufragio se contrapone a sufragio restringido, y se fundamenta en la equiparación más exacta posible entre el cuerpo de ciudadanos y el cuerpo electoral; es decir, que toda persona que tenga la mayoría de edad legal y se encuentre en el pleno uso de los derechos civiles y políticos dispone del derecho a votar sin ninguna exigencia adicional (v.g., una especial capacidad económica, cultural o de otra naturaleza). Con todo, ese paralelismo entre el cuerpo de ciudadanos y el cuerpo electoral nunca es absoluta, lo cual no empaña la universalidad del sufragio. Estas limitaciones tienen diverso origen según se refieren al sufragio activo (derecho a votar) o al pasivo (derecho a presentarse a las elecciones y, en su caso, ser elegido).

Respecto al sufragio activo, la normativa electoral exige tres condiciones: previa inscripción en el Centro Electoral, mayoría de edad (por imperativo de la Ley para la Reforma Política, arts. 2,2 y disposición transitoria primera), y estar en pleno uso de los derechos civiles y políticos (artículo 2, uno de la normativa electoral). De este modo la norma electoral comentada, para haber podido rebajar la edad electoral a dieciocho años, hubiera sido necesario que previamente hubiera rebajado la mayoría de edad actualmente vigente (veintiún años).

En cuanto al sufragio pasivo es suficiente la condición de elector, excepto en lo relativo a la necesidad de estar inscrito en el Censo Electoral con anterioridad, que no se exige, y no encontrarse incurso en una situación de inelegibilidad (artículo 3).

A este respecto, es necesario distinguir las inelegibilidades de las incompatibilidades; ambas difieren en su fundamento así como en sus consecuencias jurídicas. Las inelegibilidades se establecen en función de garantizar la libertad del elector, pretendiendo evitar que aquellas personas que se encuentren en un cargo público con competencia sobre el elector sean candidatos. En cambio, las incompatibilidades tienen como objetivo garantizar la libertad del elegido en su actuación parlamentaria. La regulación que sobre este extremo proporciona la normativa electoral no se atempera exactamente a estos criterios, debido, entre otras razones a su carácter provisional, así como a las especiales circunstancias que concurren en estas primeras elecciones.

El artículo 4, uno, recoge las inelegibilidades absolutas (Ministros del Gobierno; altos cargos nombrados por Decreto previa deliberación del Consejo de Ministros; Presidentes del Tribunal Supremo, del Consejo de Estado y del Consejo de Economía Nacional; miembros de las Fuerzas Armadas en todas sus categorías; miembros de las carreras judicial y fiscal, así como los de las Juntas Electorales; Gobernadores Civiles y Delegados del Gobierno de ámbito territorial; Jefes Superiores de Policía y Comisarios; Presidentes de los Sindicatos Nacionales y cargos sindicales no electivos de ámbito nacional; Presidentes y Delegados generales de las Entidades gestoras de la Seguridad Social; Presidentes y Directores de Organismos Autónomos con competencia en todo el territorio nacional).

El artículo 4, dos, establece las inelegibilidades relativas, es decir, aquellas que únicamente incapacitan para ser candidato en el distrito o distritos sobre los que se ejerce competencia, cuando ésta no es de ámbito nacional. Entre dichos inelegibles se encuentran los Presidentes de Diputación, Alcaldes y otros cargos de competencia territorial restringida.

Según el artículo 4, tres, toda persona que ostente uno de los mencionados cargos habrá de renunciar a los mismos en los ocho días siguientes a la convocatoria de elecciones para poder ser candidato. La toma de posesión de alguno de esos cargos desde esa fecha hasta la celebración de las elecciones también será objeto de inelegibilidad.

La incompatibilidad no impide la concurrencia a las elecciones, sino que obliga a la persona incurso en ella a optar entre el cargo declarado incompatible y el de diputado o senador. Su regulación no es propia de una ley electoral, dado que no afecta al desarrollo de las elecciones, produciéndose su existencia en un momento posterior: la constitución de las Cámaras; su inclusión en la normativa electoral obedece a derogar la, hasta ahora vigente (aunque todavía no aplicada), ley de incompatibilidades de 31 de julio de 1975, y a la implantación de un nuevo sistema. El artículo 4,5 establece la incompatibilidad de todos los inelegibles absolutos, excepto los ministros del gobierno y cargos de designación por decreto previa deliberación del Consejo de Ministros. Respecto a los inelegibles relativos,

excepto los Presidentes de Diputación, Mancomunidades Insulares y Cabildos y Alcaldes de los Ayuntamientos, también son declarados incompatibles. Sobre el derecho de opción que asiste al incompatible, la normativa electoral distingue dos supuestos. En el caso de las incompatibilidades que se corresponden con las inelegibilidades absolutas, la opción es automática; es decir, la aceptación por un diputado o senador de alguno de dichos cargos, implica la renuncia al escaño correspondiente. Los inelegibles relativos declarados incompatibles, el plazo para efectuar la opción será aquel que medie entre la proclamación de electo y la constitución de la correspondiente Cámara.

2.^o *Directo*. El sufragio directo supone la elección de los representantes por el cuerpo electoral de forma inmediata, en contraposición al sufragio indirecto en el que el cuerpo electoral elige delegados o compromisarios que, a su vez, proceden a la elección de los representantes. Impuesto dicho carácter del sufragio por la Ley para la Reforma Política, la normativa electoral, aunque no de forma expresa, lo reconoce en el artículo 20, 3 para el Congreso y en el 21, 2 para el Senado.

3.^o *Secreto*. El carácter secreto del voto se contrapone al de público, y al igual que las anteriores notas viene establecido en la Ley para la Reforma Política. Ahora bien, no basta con la declaración de tal carácter, pues dicha cualidad del voto es precaria si la emisión de éste no se encuentra rodeada de un conjunto de garantías. La normativa electoral establece al respecto una serie de medidas tendentes a asegurar el secreto del voto; así el artículo 54, 2, indica que el elector “podrá elegir las papeletas electorales e introducirlas en los sobres dentro de alguna cabina de las que se hallaren dispuestas en los locales donde estén constituidas las mesas electorales” el artículo 23, 4, cuida de que los locales reúnan las debidas condiciones para asegurar el secreto del voto. Por su parte, el artículo 55 preceptúa que “las urnas, los sobres, las papeletas y los documentos a que se refieren estas normas se ajustarán al modelo oficial que por Decreto se determine”. Las condiciones que a este fin han de reunir dichos elementos ha sido regulado por el Decreto 876/1977 de 15 de abril. La normativa hasta aquí expuesta, tiende a garantizar el secreto del voto desde un punto de vista material; por su parte el artículo 83, 6 sanciona a todo funcionario público que voluntariamente, por acción u omisión, realice actos que tengan por objeto descubrir el secreto del voto, con la pena de arresto mayor y multa de diez mil a cien mil pesetas. Es necesario precisar que el artículo 78 y a los efectos de las sanciones electorales, considera funcionarios no sólo a los que el código penal establece como tales, sino también a todos los componentes de los distintos órganos de la administración electoral.

4.^o *Igual*. Se denomina de este modo al sufragio que responde al principio de “un hombre un voto”, o lo que técnicamente sería más exacto, idéntica capacidad cuantitativa en la emisión del voto por parte de todos los miembros del cuerpo electoral. Se contrapone, por tanto, al voto plural y al voto múltiple. La normativa electoral nada dice al respecto de forma expresa, pero dado que no

atribuye a ningún miembro del cuerpo electoral la posibilidad de votar en varios distritos (ni dentro de éste en varias secciones o mesas), y sanciona la acción de "votar dos o más veces en una elección o utilizar nombre ajeno para votar", deriva el carácter igual del voto.

Cuestión distinta a este respecto, es la desproporción que a causa de la distribución territorial de los escaños resulte entre el censo electoral de cada distrito y el número de representantes que elija. La problemática que plantean las desigualdades derivadas de la distribución territorial serán expuestas más adelante.

5.º *Libre.* Técnicamente se entiende por voto libre aquel en que el derecho a votar no se ve acompañado del deber legal de realizarlo. No empaña la libertad de voto desde un punto de vista jurídico el que se defina al sufragio como un deber moral o cívico. El derecho a votar deja de ser libre, y se convierte en obligatorio, cuando al no ejercicio del derecho acompaña una sanción. La normativa electoral no sanciona la abstención (aunque sí a aquellas personas que induzcan a ella, art. 86, 1). La libertad de voto implica también, aparte de la libertad de emitirlo o no emitirlo, la posibilidad de optar libremente entre las distintas opciones electorales presentadas (el establecimiento del sistema de candidatura única anula la libertad de sufragio). A este respecto el artículo 86, 2 sanciona aquellas conductas que vayan dirigidas a realizar actos con el objeto de cohibir o ejercer presión sobre lo electores para que ejerciten el derecho a votar, votando o dejando de hacerlo a candidaturas determinadas. Del mismo modo, el número 1 del citado precepto, sanciona a aquellos que "por medio de recompensas, dádivas, remuneraciones o promesas de las mismas, soliciten directa o indirectamente el voto de algún elector".

6.º *Personal.* Sufragio personal es aquel que sólo puede ser ejercido por su titular, no siendo susceptible de delegación o cesión. Impide, por tanto, el ejercicio del derecho de voto a través de apoderado o representante. A este respecto, el artículo 2, 2 indica que "el derecho de sufragio es personalísimo e intransferible", y el artículo 53 garantiza tal carácter al preceptuar que el derecho a votar se acredite mediante la demostración de la identidad, que será justificada según el artículo 54, 2 "mediante la exhibición del Documento Nacional de Identidad o de otros documentos acreditativos de la misma". Por su parte, el artículo 89, 6 sanciona aquellas personas que utilicen nombre supuesto para efectuar el voto.

La calificación de "personalísimo" que del derecho al voto da la normativa electoral, no parece la más adecuada a la naturaleza del sufragio, dado que el contenido de alguno de los derechos personalísimos, categoría propia del derecho privado, son susceptibles de ser objeto de apoderamiento con determinados requisitos, mientras que el derecho de sufragio no puede ser ejercido por otra persona distinta de su titular bajo ninguna forma ni circunstancia.

El carácter personal del voto, no quiere decir que haya de ser ejercido presencialmente por su titular al día señalado por la convocatoria electoral para la

votación, aceptándose según el artículo 57 de la normativa electoral, la posibilidad, bajo determinadas formas y requisitos, el voto por correo.

7. *Plurinominal.* Se denomina de esta forma al sufragio, cuando el elector en su distrito ha de elegir a varios candidatos, en contraposición al sufragio uninominal en que solamente ha de elegir a uno. Tanto para el Congreso como para el Senado, el sufragio es plurinominal en todos los distritos, excepto en los de Ceuta y Melilla para el Congreso, y Menorca, Ibiza-Formentera, Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, La Gomera-Hierro para el Senado (artículo 19).

III. La distribución del territorio

La Ley para la Reforma Política, en su disposición transitoria primera, estableció un número fijo de diputados al Congreso (350) y de senadores electivos (207, cuatro por cada provincia peninsular, tres por Mallorca, Gran Canaria y Tenerife, dos por Ceuta y dos por Melilla, y uno por Menorca, Ibiza-Formentera, Lanzarote, Fuerteventura, La Palma y La Gomera-Hierro). En cuanto al Congreso la misma norma señalaba que la distribución de la cifra de escaños indicada debería efectuarse en base a la determinación de un número fijo de diputados por provincia.

Respetando estos criterios, la normativa electoral dispone que el número fijo de diputados por provincia será de dos, más uno por cada 144.000 habitantes o restos de población superiores a 70.000 (Exposición de Motivos). El artículo 19 aplica dicho criterio con el siguiente resultado: siete provincias dispondrán de tres escaños, ocho de cuatro, seis de siete, cuatro de ocho, dos de nueve, dos de diez, Sevilla de doce, Valencia de quince, Madrid de treinta y dos y Barcelona de treinta y tres.

La Exposición de Motivos justifica el reparto elegido en base a que de esta forma “se suavizan en alguna medida los efectos de nuestra irregular demografía y se atiende a un mayor equilibrio territorial en la representación”. El mayor inconveniente que plantea el criterio seguido radica en el hecho de que, si bien se logra un mayor equilibrio territorial en la representación del Congreso, es a costa de un claro desequilibrio en cuanto a la importancia cuantitativa del voto entre los electores de las provincias con máxima y mínima demografía. Consecuencia de ello, y resaltando los casos extremos, se comprueba que Soria elegirá un diputado por cada 35.474 habitantes, mientras que Barcelona elegirá un diputado por cada 137.456 habitantes.

El mencionado criterio pierde en gran medida su justificación desde el momento en que, según la Ley para la Reforma Política, es al Senado a quien corresponde la representación de las entidades territoriales. Hubiera sido más lógico, desde un punto de vista técnico, suplir en la distribución de la representación en el Congreso de los Diputados los desequilibrios de representación que supone el sistema seguido en el Senado. No nos hemos de olvidar de que nuestro Estado es unitario, y los cauces señalados por la octava Ley Fundamental, hubieran po-

dido ser interpretados de forma más adecuada mediante la atribución de un escaño fijo por distrito electoral y el resto del número fijo señalado repartirlo proporcionalmente a la población. Técnicamente esta cuestión es más patente si partimos de la base de que la Ley para la Reforma Política establece un sistema bicameral igual.

Por último es necesario señalar que, como excepción a la regla general que establece la provincia como distrito electoral, también lo serán Ceuta y Melilla a los efectos de las elecciones al Congreso y al Senado, y Menorca, Ibiza-Formentera, Lanzarote, Fuerteventura, La Palma y Gomera-Hierro, al Senado.

Para la votación los distritos electorales se dividirán en Secciones y Mesas (arts. 22 y 24, 2), “cada término municipal contará por lo menos con una sección electoral, y ninguna de éstas comprenderá áreas diferentes a distintos términos electorales”.

IV. Los sistemas electorales

Tanto la distribución del territorio como el sistema a seguir en la distribución de escaños entre los distintos candidatos a la vista de los resultados de la votación, siendo en principio cuestiones técnicas, tienen una incidencia no desdeñable sobre los resultados definitivos de la misma. A estos efectos, la Ley para la Reforma Política establece el sistema proporcional para el Congreso de Diputados (incorporando dos principios correctores: el número fijo de diputados por provincia —distrito electoral—, ya visto, y la necesidad de obtener cada lista un número mínimo de sufragios para poder participar en la distribución de escaños, que se fija en el tres por ciento de los votos válidamente emitidos en el distrito de que se trate —art. 20, 4, b—); los senadores habrán de ser elegidos por el sistema mayoritario. Pasamos a exponer ambos sistemas, comenzando por el establecido para el Senado (mayoritario) por ser el sistema proporcional (Congreso) de más fácil comprensión a partir del mayoritario.

1.º El sistema electoral para las elecciones al Senado. El sistema mayoritario de voto limitado. La Ley para la Reforma Política en su disposición transitoria primera, estableció el sistema mayoritario para el Senado sin hacer mayores precisiones al respecto.

Desde un punto de vista doctrinal, se denominan sistemas mayoritarios a aquellos que atribuyen la totalidad de los puestos a cubrir a los candidatos que hayan obtenido mayor número de votos en su respectivo distrito. El problema técnico que se plantea es que dicho sistema favorece a las formaciones políticas mayoritarias en detrimento de las minoritarias que resultan infrarepresentadas en relación al número de votos obtenidos. Con todo, existen dentro de este sistema variantes tendentes a evitar, o al menos disminuir dichos resultados. Nada decía al respecto la Ley para la Reforma Política, dejando en consecuencia libertad al Gobierno entre los distintos subsistemas posibles.

La normativa electoral reintroduce el subsistema de voto limitado, que es aquel que respetando el principio de mayorías, asegura parte de los escaños a las minorías. Ahora bien, dicha representación a las minorías no se efectúa en base a criterios de proporcionalidad, sino en base a criterios empíricos, reservando a priori un determinado número de escaños a los sectores minoritarios del electorado, a través del procedimiento de solamente permitir al elector que vote a un número de candidatos inferior al que le correspondería elegir en su distrito. Otro sistema empírico que pretende los mismos fines, pero de distinto modo, es el voto acumulado, que otorga a cada elector tantos votos como candidatos han de ser elegidos en el distrito, permitiéndole concentrar dichos votos en un solo candidato.

La citada normativa electoral en su artículo 22, 2 establece que, para las elecciones al Senado “los electores sólo podrán dar su voto a un máximo de tres entre los candidatos proclamados en el distrito”, dado que en los distritos ordinarios el número de senadores a elegir es de cuatro, se reserva uno de dichos escaños a la minoría.

Incomprensiblemente, desde un punto de vista técnico, la Exposición de Motivos denomina a este subsistema mayoritario como “voto restringido”, lo cual es inexacto, e induce a confusión. Sufragio o voto restringido como ya se ha visto, se contraponen a sufragio universal, y éste se encuentra recogido en la Ley Fundamental para la Reforma Política, y desarrollado en la propia normativa electoral. Se trata de sufragio limitado.

Este sistema fue propuesto por primera vez por Condorcet en su “Plan de Constitución” que presentó a la Convención en 1793, pasando en el transcurso del siglo XIX a varias legislaciones positivas. La Ley Electoral de 1907 incorpora tal sistema a nuestro derecho electoral en su artículo 21, al preceptuar “En los distritos en que deba elegirse un diputado..., cada elector no podrá dar válidamente su voto más que a una persona: cuando se elija a más de uno, hasta cuatro, tendrá derecho a votar uno menos de los que hayan de elegirse, o dos menos si se eligieran a más de cuatro, o tres menos si se eligieran más de ocho y cuatro menos si se eligieran a más de diez”.

El voto limitado ofrece indudables ventajas sobre el sistema mayoritario simple, pero también tiene importantes inconvenientes si se le compara, técnicamente, con el sistema proporcional. Entre las ventajas se encuentran las siguientes: a) simplicidad del procedimiento; b) posibilidad del elector de formar su propia lista, y c) por último, al reservar un número de puestos a la minoría, se favorece la consolidación de una mayoría cualificada.

Entre los inconvenientes destacan los siguientes: a) Cuando en un distrito exista una mayoría muy cualificada, y con un electorado muy disciplinado puede ocupar todos los escaños destruyendo la limitación del voto. En nuestra terminología electoral tradicional se denominaba a tal circunstancia (presentar tantos candidatos como el número total a elegir por el distrito) “ir al copo”. Indudable-

mente tal actitud electoral por parte del partido encierra riesgos, pues al dividir a su electorado puede perder los puestos de la mayoría y los de la minoría. b) Una minoría puede obtener una representación excesiva en relación con los seguidores de que dispone en el distrito de que se trate. c) En el supuesto de que existan varias minorías en el distrito, únicamente obtendrá representación una de ellas. 4) A pesar de que se reserva un número de escaños a la minoría, dada la posibilidad que tiene el elector de confeccionar su propia lista entre los distintos candidatos, puede llegarse en la práctica a que se produzca un reparto de votos que no se logre una diferenciación sustancial entre mayoría ni minoría.

Podríamos concluir el comentario referente a este apartado, indicando que la intención del legislador no fue otra que pretender aplicar correctores a los resultados que derivarían de establecer un sistema mayoritario simple. A este respecto, la Exposición de Motivos de la normativa electoral señala, “Dentro del sistema electoral mayoritario se ha optado por la modalidad de sufragio restringido, de manera que cada elector pueda votar hasta tres candidatos, obteniendo los cuatro escaños correspondientes a cada distrito quienes hayan conseguido mayor número de sufragios. Se respeta así el criterio de la Ley para la Reforma Política, a la vez que se arbitran técnicas para garantizar el respeto y representación de las minorías, lo que es esencial a la democracia”.

2.º El sistema electoral para la elección de los diputados: Sistema proporcional; el sistema d'Hondt. La Ley para la Reforma Política preceptuaba que las elecciones para el Congreso deberían regirse por un sistema electoral proporcional estableciendo los principios correctores más arriba descritos. Respecto al sistema proporcional se ha de señalar que es aquel que pretende establecer, en nuestro caso a nivel de distrito, la mayor proporción posible entre el número de votos obtenidos por cada candidatura o lista de candidatos y el número de escaños que se le atribuyan. Para que exista proporcionalidad, por tanto, es imprescindible que el sufragio sea plurinominal, pues de no ser así fallaría uno de los elementos para establecer la proporción deseada. Entre los sistemas proporcionales el más sencillo es el del cociente electoral. Dicha cifra es el resultado de dividir el número de votos válidamente expresados en el distrito por el número de puestos a cubrir en el mismo. Hallada esa cifra se procede a dividir el número de votos obtenidos por cada lista por dicho cociente electoral y el resultado que nos dé será el de escaños que le corresponden, haciendo caso omiso a los decimales, dado que los escaños son indivisibles. El problema que plantea tal sistema es que fácilmente quedarán puestos sin cubrir y votos sin representación, con lo cual será imprescindible proceder a un segundo reparto o distribución de los escaños sobrantes entre las listas con votos también sobrantes y sin representación. En esta distribución de restos se puede a su vez seguir fundamentalmente dos sistemas: el del resto más fuerte y el de la media más fuerte. Como su mismo nombre indica, el primer sistema consiste en atribuir sucesivamente los puestos que queden sin cubrir en el primer reparto, a aquellas listas cuyo número de votos sin representación sea más elevada. Por el contrario, el sistema de la media más fuerte, es aquel en que se atribuyen, también sucesivamente, los escaños so-

brantes en el primer reparto a aquellas listas que obtengan una cifra mayor, como resultado de dividir su número de votos obtenidos por el número de puestos a cubrir en el distrito de que se trate.

Quizá pueda parecer prolija esta introducción antes de entrar a analizar el sistema que nuestra normativa electoral propone, pero creemos que difícilmente se puede entender su repercusión electoral sin comprender bien los conceptos antes expresados.

El sistema que nuestra ley electoral establece, es el descrito por primera vez en 1878 por el matemático belga V. d'Hondt y que desarrolló de forma completa en una monografía publicada en Bruselas en 1882. Dicho sistema aventaja al más arriba expresado del cociente electoral en que resume en una sola operación lo que en aquel habría de efectuarse en dos (primera distribución y reparto de restos). Con el sistema d'Hondt no quedan restos (es decir, puestos sin cubrir y votos sin representación simultáneamente). El resultado al que conduce, como indica la Exposición de Motivos, es el mismo que si se efectuara la distribución por el sistema de cociente electoral repartiendo los restos por la media más fuerte.

Nuestra normativa electoral expresa este sistema en el artículo 20; 4, c) del siguiente modo:

“c) Se dividirá el total de votos obtenidos por cada lista por uno, dos, tres, etcétera, hasta un número igual al de escaños correspondientes al distrito, formándose el cuadro que aparece en el ejemplo práctico. Los escaños se atribuirán a las listas a los que correspondan en el cuadro los mayores cocientes, procediéndose a esa atribución por orden decreciente de éstos.”

**Ejemplo práctico: 480.000 votos válidos emitidos
en un distrito que elija ocho Diputados**

Votación repartida entre seis listas:

A (168.000 votos), B (104.000), C (72.000), D (64.000), E (40.000), F (32.000)

División	1	2	3	4	5	6	7	8
A	166.000	84.000	56.000	42.000	33.600	28.000	24.000	21.000
B	104.000	52.000	34.666	26.000	20.800	17.333	14.857	13.000
C	72.000	36.000	24.000	18.000	14.400	12.000	10.285	9.000
D	64.000	32.000	21.333	16.000	12.800	10.666	9.142	8.000
E	40.000	20.000	13.333	10.000	8.000	6.666	5.714	5.000
F	32.000	16.000	10.666	8.000	6.400	5.333	4.571	4.000

Por consiguiente: La lista A obtiene cuatro escaños; la lista B, dos escaños, y la C y D, un escaño cada una.

El procedimiento seguido para la expresión legal, siendo exacto en los resultados, es confuso desde el momento en que no queda claro cuál es el fundamento de la distribución efectuada. El sistema d'Hondt se basa en hallar el divisor electoral o denominador común, cuya cifra, al dividir el número de votos obtenidos por cada lista, nos dará (prescindiendo de decimales por la razón antes expuesta) el número de puestos que corresponde a cada lista, sin que nos queden sin cubrir ninguno.

Toda la operación que se recoge en el ejemplo práctico va dirigida a la determinación del divisor electoral antes mencionado, y que, en el mismo, no es otro que el cociente 42.000 correspondiente a la lista A. Divídase el número de votos obtenidos por cada lista y hallaremos el número de puestos que a cada una corresponde. El resultado es el mismo, pero no se manifiesta con claridad el fundamento de la distribución efectuada. Hubiera sido quizá más correcto preceptuar que el número de escaños correspondientes a cada lista sería la cifra resultante de dividir el número de votos obtenido por cada una de ellas, por el divisor electoral o denominador común y, a continuación, señalar el procedimiento para hallar dicha cifra. Planteada así la cuestión no habría lugar al sistema que el artículo 20, 5 establece para la resolución de empates, pues los que se produzcan en el momento de clasificar decrecientemente los cocientes resultantes son irrelevantes. El único empate que importa es el que se produzca al hallar el divisor electoral o común denominador. Con haber resuelto ese empate era suficiente.

El sistema d'Hondt ha sufrido diversas correcciones en su aplicación práctica en las legislaciones positivas, por lo que interesa poner de relieve que el seguido por nuestra normativa electoral es denominado "puro", que tiene como consecuencia favorecer al partido con mayor número de votos en el distrito de que se trate (al igual que el sistema de cociente electoral con distribución de restos por la media más fuerte), por ello es exacta la afirmación de la Exposición de Motivos de la normativa electoral cuando afirma que se trata de un "poderoso corrector del excesivo fraccionamiento de las representaciones parlamentarias".

V. La administración electoral

La organización y el desarrollo de las distintas operaciones electorales se encomienda a las Juntas electorales que "se denominarán, Central, Provinciales y de Zona", teniendo la primera competencia en el ámbito nacional, las segundas en la demarcación de su nombre y las terceras en los partidos judiciales a que se correspondan.

Respecto a su composición, se distinguen tres tipos de miembros: miembros de la carrera judicial, representantes de corporaciones jurídicas y docentes y el propio electorado (en las Juntas Central y Provinciales, propuestos por las fuerzas políticas participantes en las elecciones, y en las de Zona, por sorteo entre los electores); según la Exposición de Motivos "de esta manera se pretende que

los Organos encargados de la Administración Electoral acojan en su seno a quienes mejor puedan asegurar la absoluta imparcialidad”.

Las funciones de las mencionadas Juntas Electorales, cada una en su ámbito territorial propio, se podrían resumir en las siguientes: administración del Censo Electoral, organización de las secciones y mesas electorales, dirección del procedimiento electoral, control sobre el ejercicio de las libertades públicas durante el periodo electoral, escrutinio general y proclamación de electos.

Todo lo relativo a su composición, atribuciones y funcionamiento, se encuentra regulado en el capítulo I del título II de la normativa electoral.

VI. El procedimiento electoral

Desde el punto de vista dinámico, el desarrollo de las elecciones se compone, resumidamente, de las siguientes etapas y actuaciones:

1. *Convocatoria.* Señala el comienzo del periodo electoral y se “efectuará por Real Decreto acordado en Consejo de Ministros a propuesta del Presidente del Gobierno, y entre la fecha de su publicación y la celebración de las elecciones deberá mediar un plazo mínimo de cincuenta y cinco días (art. 28, 1), debiendo dársele la máxima publicidad (art. 28, 2). La fecha de la convocatoria de elecciones tiene una excepcional importancia, pues a partir de ella se computa todo el sistema de plazos para la realización de las distintas operaciones electorales. A este respecto, según la disposición final segunda “para el cómputo de los plazos y términos a que se refiere el presente Real Decreto-Ley los días se entenderán siempre como días naturales, salvo que otra cosa se disponga expresamente”.

2. *Constitución de las Juntas Electorales.* Habrá de efectuarse provisionalmente en los siete días siguientes a la convocatoria, y definitivamente en el plazo de otros siete días (art. 12, 3).

3. Determinación por las Juntas Electorales Provinciales de las Secciones electorales (art. 22, 2) y formación de las Mesas electorales (arts. 24 a 27).

4. *Presentación de candidatos,* presentación de candidatos, que habrá de efectuarse entre el undécimo y vigésimo día a la convocatoria de las elecciones (art. 30). Estarán capacitados para efectuar dicha presentación, las Asociaciones y Federaciones inscritas en el Registro creado por la Ley de Asociación Política, las coaliciones que se formen entre dichas Asociaciones y Federaciones, y los electores del distrito, agrupados a este fin en número no inferior al uno por mil del cuerpo electoral del distrito, y en ningún caso inferior a quinientos (art. 30, 3). La presentación habrá de efectuarse ante la Junta provincial correspondiente.

5. *Proclamación de candidatos:* Se efectuará por las Juntas Electorales Provinciales a los treinta días de la convocatoria oficial, desestimando aquellas que adolezcan de algún defecto de formulación, incumpliendo la normativa electoral al respecto (art. 33, 1 y 2). El acuerdo denegatorio de la proclamación, podrá ser objeto de recurso electoral ante las salas de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia territorial donde se halle el distrito electoral (art. 73, 1 y 2).

6. *Campaña electoral:* Según el artículo 37, 1 de la normativa electoral, se entiende por campaña electoral: “El conjunto de actividades lícitas organizadas y desarrolladas por los partidos, las federaciones, las coaliciones, las agrupaciones de electores y los candidatos en orden a la capacitación de sufragios.”

La regulación de la campaña electoral, según la Exposición de Motivos, obedece a dos principios: “La igualdad de oportunidades de todos los contendientes, asegurada a través de todos los medios informativos de titularidad pública y de la adecuación de espacios y lugares idóneos para la propaganda electoral, y el control por quienes administran el proceso electoral de toda la campaña, e incluso de los gastos por ella ocasionados, a fin de que ninguna libertad pueda ser inhibida por el abusivo ejercicio de la libertad ajena.”

Los artículos 44 a 48 regulan aspectos relativos a los gastos electorales.

7. *Constitución de las Mesas:* Se efectuará a las ocho horas del día señalado para la votación, procediendo inmediatamente a recibir las credenciales de los interventores, que pasarán a formar parte de la misma, no pudiendo aceptarse más de dos interventores por lista, levantándose a continuación acta de la constitución de la mesa (arts. 49 y siguientes).

8. *Votación:* Se iniciará a las nueve horas y terminará a las veinte horas del día señalado para la elección. Tanto el procedimiento para la misma como las garantías que han de rodear el secreto y la libertad de voto, se encuentran reguladas en los artículos 52 a 63. La votación para el Congreso y para el Senado se realizarán en el mismo acto, utilizando sobres distintos a tal fin.

9. *Escrutinio:* Se efectúa en dos fases: la primera, a nivel de sección, de acuerdo con las normas contenidas en los artículos 64 a 66. Según el artículo 64, 6 “hecho el recuento de votos, preguntará el Presidente (de la Mesa) si hay alguna protesta que hacer contra el escrutinio, o no habiéndose hecho, o después de resuelta por la mesa las que se presentaren, anunciará en alta voz el resultado, especificando el número de votantes, el de papeletas leídas, el de papeletas válidas, el de papeletas en blanco, el de papeletas nulas y el de votos obtenidos por cada candidatura”. Inmediatamente después “se destruirán en presencia de los concurrentes, excepto aquellas a las que se les hubiera negado validez, que se incorporarán al acta rubricadas por los componentes de la mesa y serán archivados por

ella. El acta de la elección recogerá todos los extremos indicados en el artículo 66, 1 y con la documentación que ha de acompañarla, se entregará al Juez Municipal o Comarcal, quien en el plazo de diez horas la hará llegar a la Junta Electoral Provincial.

El escrutinio general lo efectuará la Junta Electoral Provincial, el quinto día hábil siguiente al de la elección. En presencia de los representantes de las candidaturas, que podrán formular las reclamaciones a que hubiere lugar, se efectuará el recuento sección por sección y se procederá a adjudicar los escaños al Congreso a las distintas listas, de acuerdo con el sistema d'Hondt, antes expuesto, y proclamar Senadores electos a aquellos que hubieren obtenido mayor número de votos según lo preceptuado en el artículo 21 (art. 69).

La Junta Electoral Provincial expedirá a los Senadores y Diputados electos las credenciales expresivas de su proclamación como tales ante las Cortes; así mismo, se remitirán a la Junta Electoral Central las relaciones de Diputados y Senadores electos, quien a su vez remitirá a las Cortes la relación de Diputados y Senadores proclamados en todo el territorio nacional.

VII. El contencioso electoral

En nuestro derecho histórico, correspondía el contencioso electoral a las propias Cortes, siendo regulado su procedimiento en los correspondientes Reglamentos de las Cámaras parlamentarias, bajo la denominación de “verificación de poderes”. Nuestra más reciente legislación encomendaba a las Juntas Electorales Central y Provinciales, la resolución de las impugnaciones que se produjeran.

La normativa electoral que comentamos, por el contrario, sigue un sistema judicial, encomendando el contencioso electoral a una serie de controles estrictamente judiciales “que pretenden asegurar la defensa de la legalidad en todo el proceso electoral, de manera que sean los jueces quienes en último término decidan sobre la proclamación o no de las candidaturas..., y sobre la proclamación de los resultados en las elecciones” (Exposición de Motivos).

VIII. Delitos e infracciones electorales

Por afectar el contenido del título VIII de la normativa electoral tanto a nuestra disciplina como al derecho Penal, se incluye el texto íntegro de dicho título en la Sección legislativa de este Boletín, por lo que omitimos cualquier comentario.

IX. Conclusión

Si hemos de dar una visión general, escueta y apresurada de la norma que se ha intentado exponer, se podría llegar a las siguientes conclusiones:

1. Dispone de las ventajas propias de las normas unitarias y completas frente a la enorme complejidad normativa de la legislación inmediatamente anterior.

2. Se aprecia una clara preocupación por las garantías electorales, sobre todo en lo relativo al secreto y libertad del sufragio, aplicando las técnicas más recientes en el Derecho Comparado.

3. A la vista de las limitaciones impuestas por la Ley para la Reforma Política, en cuanto a los sistemas electorales, resulta paradójico que en la aplicación de principios correctores para el Congreso no se hubieran utilizado los mínimos posibles, mientras que, sin exigirlo la citada Ley Fundamental, se han aplicado principios correctores al sistema mayoritario, estableciendo un sistema empírico de signo minoritario (voto limitado).

4. La normativa electoral es deficiente, desde un punto de vista técnico, a la hora de regular el sistema electoral para el Congreso (sistema d'Hondt) al igual que en la Exposición de Motivos califica de restringido al sufragio limitado que establece.

5. Constituye un acierto la fórmula empleada para desvincular la Administración Electoral de la Administración Pública y el Gobierno.

6. El encomendar el contencioso electoral a la Jurisdicción Contencioso Administrativa, supone una garantía de imparcialidad y, por ende, el poder judicial sustrae dicho tema de capital importancia, al empleo de otros sistemas más proclives a la intervención en sus decisiones de factores ajenos al propio desenvolvimiento de la elección.

7. Si bien la norma expuesta no tiene vocación de futuro, como decimos al principio de este comentario, contiene partes que pueden y deben pasar a legislaciones electorales futuras.

Faustino Fernández-Miranda Alonso

DERECHO CANONICO

UNIDAD DIDACTICA/4. TEMA XX. 3.—Excepciones al principio de indisolubilidad del matrimonio: c) Disolución del matrimonio legítimo consumado en favor de la fe.

El 6 de diciembre de 1973, se dio por la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe la “Instrucción para la disolución de matrimonios en favor de la Fe”, a la que se acompañó de unas “Normas procesales”. Esta disposición abrogó las contenidas en la Instrucción de 1 de mayo de 1934, citada en la Unidad Didáctica 4 y 5 (Temas XX y XXVI) y recogidas en el “Curso de Derecho matrimonial canónico” del profesor A. BERNARDEZ, por ser vigentes en el momento de la edición.

Tanto el texto de la “Instrucción”, como las “Normas de Procedimiento” que lo acompañan, implican no una mera modificación de la normativa procesal, sino, además, una parte sustantiva en la que se exponen una serie de requisitos o condiciones, algunas “sine qua non”, para que el Romano Pontífice haga *aplicación del llamado “Privilegio Petrino”* a matrimonios dispares o legítimos.

El profesor J. L. SANTOS, en la obra “Derecho Canónico”, preparada en colaboración con otros quince Catedráticos de la Asignatura, estudia esta parte sustantiva, que puede resumirse así:

a) Por lo que afecta a la disolución *en favor de la Fe de uno de los cónyuges* la casuística se refiere, fundamentalmente, a dos clases de uniones matrimoniales: 1) disolución de matrimonios dispares, celebrados entre parte católica y parte no bautizada, con dispensa o no del impedimento de disparidad de cultos; 2) disolución de matrimonios entre parte bautizada no católica y parte no bautizada, los cuales quedan excluidos del impedimento de disparidad de cultos.

Siempre se trata de la aplicación del Privilegio de la Fe en favor de uno de los cónyuges, en situaciones graves, prácticamente irreversibles, como separación o divorcio de los cónyuges, con deseo de contraer con parte católica. Con la disolución, por la potestad ministerial del Vicario de Cristo, se pretende la tranquilidad de conciencia de los propios cónyuges y la perseverancia en la Fe y la *salus animarum* de alguna de las personas comprometidas en la unión conyugal a disolver o en la futura a construir por alguno de los esposos.

Los requisitos sustantivos, señalados en la “Instrucción” de la S. C. para la Doctrina de la Fe de 6-XII-1973, como indispensables para la concesión de la gracia pontificia son: 1) la ca-

rencia de bautismo, en uno, al menos, de los cónyuges, durante todo el tiempo de la vida matrimonial (matrimonio no rato); 2) si se dio el bautismo de la parte no cristiana, desde la fecha de su recepción, no ha de haber consumación del matrimonio (matrimonio rato, pero no consumado), y 3) la garantía de la parte no bautizada o bautizada fuera de la Iglesia Católica de autorizar la profesión y práctica de la Fe Católica y el bautismo y educación en ésta de la prole.

Como requisitos, sin valor de indispensables, señala los siguientes: 1) la imposibilidad de restaurar la vida matrimonial; 2) la no culpabilidad del cónyuge que pide la disolución y de la parte católica con la que se desea contraer nuevo matrimonio; 3) la interpelación al otro cónyuge sobre si está conforme en la disolución del matrimonio; 4) el proveer, según justicia, a la situación del cónyuge abandonado y a la prole habida con él; 5) por último, la parte católica con la que se desea contraer nuevo matrimonio ha de garantizar su Fe personal y caso de no haber recibido todavía el bautismo, ha de estar en periodo de catecumenado, dándose certeza moral de la recepción próxima.

b) Por lo que se refiere a la disolución de matrimonios *en favor de la Fe de tercera persona*, se trata de uniones legítimas o mixtas y no se da previa conversión de ninguno de los cónyuges, o, respectivamente, de la parte no bautizada.

El supuesto general, como señala el profesor J. L. SANTOS, lo mismo que en los casos del apartado anterior, parte de graves situaciones de rotura de la vida conyugal y, simultáneamente, de la relación concubinaria de uno de los esposos con tercera persona bautizada en la Fe Católica.

La disolución por la potestad ministerial o vicaria del Romano Pontífice se concede a petición de esa tercera persona católica, cuya *salus animarum* está comprometida por esa situación de vida pseudomrimonial que implica su exclusión de la recepción de los sacramentos; a la vez se pretende la *salus animarum* de la prole habida.

También, como en el apartado antes estudiado, es de aplicación la citada "Instrucción" *"pro solutione matrimonii in favorem fidei"*.

UNIDAD DIDACTICA/5. TEMA XXVI. C) OTROS PROCESOS MATRIMONIALES. b) Disolución del matrimonio por aplicación del Privilegio Petri.

Siguiendo al profesor M. LOPEZ ALARCON, en la obra "Derecho Canónico", antes citada, puede resumirse que para la disolución de matrimonios mixtos o legítimos por aplicación del Privilegio Petri, la normativa procesal, por abrogación de la Instrucción de la S. C. del Santo Oficio (hoy, para la Doctrina de la Fe) de 1 de mayo de 1934, se sujeta a las "Normas de Procedimiento" para tramitar el proceso administrativo correspondiente, publicadas junto con la citada "Instrucción" de 6 de diciembre de 1973, ya estudiada.

Todos los requisitos sustantivos por ésta señalados, como condiciones *sine qua non* o como convenientes, han de probarse en el proceso, hasta no tener duda moral de su cumplimiento, en cada caso.

Debe señalarse que la disolución del matrimonio dispar, contraído con dispensa del impedimento de disparidad de cultos, no se concede, por el Sumo Pontífice, a la parte que solicita la gracia, si es para pasar a nuevas nupcias con un no bautizado, que no se convierta a la Fe Ca-

tólica. Tampoco se concede la disolución del matrimonio que haya sido contraído o convalidado después de obtenida la disolución de un primer vínculo.

Las “Normas procedurales” establecen que el proceso administrativo lo instruye el Ordinario del lugar, competente conforme a lo dispuesto en el Motu proprio “Causas matrimoniales” IV, 1, pudiéndolo hacer por sí o por medio de otro eclesiástico delegado.

Una vez concluida esta parte indagatoria y probatoria del proceso, se remite a la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, por triplicado, todas las actuaciones, para, conformado por ella, presentarlo al Vicario de Cristo para concesión de la gracia suplicada, de acuerdo con lo dispuesto por el núm. 34 de la Constitución Apostólica “*Regimini Ecclesiae Universae*” de 15 de agosto de 1967.

Antes de su remisión a la Curia Romana, el Ordinario hará constar su voto, junto con los motivos que aconsejan la disolución, en cada caso, señalando, siempre, si el orador o peticionario de la gracia, que instó el proceso, ya ha atentado nuevo matrimonio o si vive en concubinato. También se unirá el voto del Defensor del vínculo, que ha de intervenir, necesariamente, en la tramitación del proceso en su fase diocesana.

Jaime Pérez-Llantada

DERECHO PENAL

Las últimas modificaciones del Código Penal han sido las siguientes:

1. Modificación de los artículos 349 y 350, cuyo texto lo encontrará en la parte de Sección Legislativa de este Boletín (Real Decreto-Ley 16/1977, de 25 de febrero, por el que se regulan los aspectos penales, administrativos y fiscales de los juegos de suerte, envite o azar y apuestas, artículo 2.º). (*)
2. Modificación del artículo 222, cuyo texto lo encontrará en la disposición adicional cuarta del Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo.
3. Se deroga el artículo 165 bis b) del Código penal, según se recoge en el artículo 2.º del Real Decreto-Ley 24/1977, de 1 de abril, sobre libertad de expresión.
4. También se modifican los delitos electorales, por cuyo motivo se publica en este Boletín el Título VIII del Real Decreto-Ley 20/1977, de 18 de marzo, sobre Normas Electorales.

(*) Sobre los problemas que plantea la modificación de estos artículos véase, Serrano Gómez, A.: *Juegos ilícitos*, en Anuario de Derecho penal, 1977, fasc. II.

DERECHO INTERNACIONAL PUBLICO Y DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO

Hay que tener presente la trascendental incidencia que sobre todo el Derecho positivo español y sobre nuestras dos disciplinas en particular ha supuesto la ratificación y publicación en el "B.O.E." núm. 103 del pasado 30 de abril (págs. 9.377 y ss.) de los dos "Pactos Universales de Derechos Humanos de las Naciones Unidas" de 1966 (entrados oficialmente en vigor a comienzos de 1976). Se hace, en efecto, múltiple referencia a los mismos en casi todas las Unidades Didácticas de Derecho Internacional Público (especialmente, III, IV y V, Organización de Naciones Unidas, Competencia Personal, Protección de intereses jurídicos, sociales, culturales y humanitarios...), e Internacional Privado (especialmente, Unidad V, Nacionalidad y Condición del Extranjero). Ambos Pactos han pasado a formar parte del Derecho español en virtud del artículo 1 de la Ley de Reforma Política en materia de derechos fundamentales de la persona, específicamente y que únicamente en virtud del artículo 1-5.º del nuevo Título Preliminar del Código civil en materia de tratados internacionales.

España, pues, ha pasado a formar parte de un grupo de países que podríamos denominar "miembros enteramente plenos" de las Naciones Unidas (aproximadamente, unos 40), que, desde el pasado año, aseguran el total respeto y protección de los Derechos del Hombre a escala universal, después de una larga etapa de casi diez años en que se padeció un inexplicable retraso en esta trascendental materia, hasta el punto de hacer dudar de su verdadera eficacia. Sin embargo, no pertenece España todavía a la "minoría selecta" de poco más de una decena de países que son partes en el Protocolo Facultativo del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, que abre la vía de una propia acción, del individuo en la materia, con posibilidad de denuncia de cualquier transgresión, incluso por parte de su Estado (posibilidad ampliamente reconocida ya a escala regional en el Convenio sobre Derechos Humanos del Consejo de Europa, el "Pacto de Roma" de 1950). Esperemos que la promesa oficial de nuestro Ministerio de Asuntos Exteriores de incorporarse a dicho Protocolo en el plazo más breve posible se lleve a realidad.

Conviene además recordar que toda referencia que en las Unidades Didácticas se haga a la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU de 1948, es conveniente ahora referirla, por su mayor precisión, a los dos Pactos (con la salvedad, únicamente, del derecho de propiedad, que, por el tiempo transcurrido de 1948 a 1966 ha perdido mucha de su entidad en cuanto derecho fundamental de la persona).

Recordemos, para terminar, que la protección internacional de los derechos humanos es objetivo fundamental, directamente y en todos sus planos, del Derecho Internacional Público; y

también, del Derecho Internacional Privado, pues no olvidemos que asegurar la íntegra personalidad jurídica del individuo se encuentre donde se encuentre y velar por la debida custodia de los derechos adquiridos y de las expectativas y situaciones jurídicas debidamente constituidas (evitación de situaciones "claudicantes" por el mero paso de unas fronteras) es la principal razón de ser del mismo.

(Consultar el texto en "Crónica Legislativa").

Pedro A. Ferrer Sanchis

DERECHO POLITICO II

“Comentario al Real Decreto-Ley 20/1977 sobre normas electorales”,

SUMARIO

- I. Introducción.—II. Características generales del sufragio.** 1.º *Universal*: Inelegibilidades e incompatibilidades. 2.º *Directo*. 3.º *Secreto*. 4.º *Igual*. 5.º *Libre*. 6.º *Personal*. 7.º *Plurinominal*.—**III. La distribución del territorio.—IV. Los sistemas electorales.** 1. *El Senado*: Sistema mayoritario de voto limitado. 2. *El Congreso*: Sufragio proporcional, sistema de V. d'Hondt.—**V. La Administración electoral.—VI. El procedimiento electoral.** 1. *Convocatoria*. 2. *Constitución de las Juntas Electorales*. 3. *Determinación de las Secciones Electorales*. 4. *Presentación de candidatos*. 5. *Proclamación de candidatos*. 6. *Campaña electoral*. 7. *Constitución de las Mesas*. 8. *Votación*. 9. *Escrutinio*.—**VII. El Contencioso electoral.—VIII. Los delitos electorales.—IX. Conclusión.**

I. Introducción

La Ley para la Reforma Política de 4 de enero de 1977, autorizó al Gobierno en su disposición transitoria primera para regular las elecciones de las nuevas Cortes que dicha Ley Fundamental creaba. Consecuencia de tal autorización es el Real Decreto-Ley 20/1977 de 18 de marzo ("B.O.E." del 23 de marzo), cuyas líneas generales se pretenden exponer a continuación; se intenta así con este comentario suplir la publicación íntegra de dicha norma en la Sección legislativa, pues su extensión y complejidad lo desaconseja; por otra parte, es necesario tener en cuenta que se trata de una norma cuya vigencia queda limitada a la regulación de las primeras elecciones legislativas, no teniendo, por tanto, una dimensión de futuro.

A efectos de las Unidades Didácticas, el presente comentario amplía las modificaciones introducidas por la Ley para la Reforma Política en Derecho Político II y que fueron recogidas en el número 0 de este Boletín; para una mejor comprensión de lo aquí expuesto, sería conveniente que el alumno relejera los temas XVIII, XIX y XX de las Unidades Didácticas de Derecho Político I, donde se explican las líneas generales del Derecho Electoral.

Como ya se indicó (ver el Boletín número 0, pág. 9), la Ley para la Reforma Política modifica los Principios inspiradores del Régimen Político contenido en las Leyes Fundamentales, en lo referente a la representación política, al abandonar el principio orgánico y sustituirle por el sufragio inorgánico, propio de los ordenamientos democráticos liberales; principios que se incorporan a nuestro derecho según el artículo primero de la citada Ley.

El Decreto-Ley sobre normativa electoral regula de forma unitaria los distintos aspectos relativos a las elecciones legislativas, y, desde el punto de vista formal, consta de Exposición de Motivos, noventa y dos artículos distribuidos en ocho títulos (disposiciones generales, organización electoral, convocatoria de elecciones, presentación y proclamación de candidatos, campaña electoral, procedimiento electoral, reclamaciones electorales y delitos e infracciones electorales), cinco disposiciones transitorias y cuatro finales.

El rango normativo dado a la disposición (Decreto-Ley) le permite derogar explícitamente la Ley Electoral de 8 de agosto de 1907 y la Ley de Incompatibilidades de 31 de julio de 1975, así como deslegalizar las demás normas con rango de Ley en lo que se opongan a ella. Según la disposición final primera, “Se autoriza al Gobierno para dictar las disposiciones necesarias para el cumplimiento de las presentes normas”.

Para una mejor exposición vamos a distinguir los siguientes apartados: Características generales del sufragio: inelegibilidades e incompatibilidades; distribución del territorio; sistemas electorales; la administración electoral; el procedimiento electoral; el contencioso electoral; los delitos electorales; por último, resumiremos lo más destacable de dichas normas en unas breves conclusiones.

II. Características generales del sufragio

Por imperativo de la Ley para la Reforma Política, el sufragio en nuestro derecho pasa a ser universal, directo y secreto (artículo 2.º, 2 para las elecciones al Congreso de los Diputados, y disposición transitoria primera para las elecciones al Senado). La normativa electoral desarrolla estas características del sufragio, además, regulándole como personal, igual, libre y plurinominal. Veamos por separado cada una de estas notas.

1.º Universal. El carácter universal del sufragio se contrapone a sufragio restringido, y se fundamenta en la equiparación más exacta posible entre el cuerpo de ciudadanos y el cuerpo electoral; es decir, que toda persona que tenga la mayoría de edad legal y se encuentre en el pleno uso de los derechos civiles y políticos dispone del derecho a votar sin ninguna exigencia adicional (v.g., una especial capacidad económica, cultural o de otra naturaleza). Con todo, ese paralelismo entre el cuerpo de ciudadanos y el cuerpo electoral nunca es absoluta, lo cual no empaña la universalidad del sufragio. Estas limitaciones tienen diverso origen según se refieren al sufragio activo (derecho a votar) o al pasivo (derecho a presentarse a las elecciones y, en su caso, ser elegido).

Respecto al sufragio activo, la normativa electoral exige tres condiciones: previa inscripción en el Centro Electoral, mayoría de edad (por imperativo de la Ley para la Reforma Política, arts. 2,2 y disposición transitoria primera), y estar en pleno uso de los derechos civiles y políticos (artículo 2, uno de la normativa electoral). De este modo la norma electoral comentada, para haber podido rebajar la edad electoral a dieciocho años, hubiera sido necesario que previamente hubiera rebajado la mayoría de edad actualmente vigente (veintiún años).

En cuanto al sufragio pasivo es suficiente la condición de elector, excepto en lo relativo a la necesidad de estar inscrito en el Censo Electoral con anterioridad, que no se exige, y no encontrarse incurso en una situación de inelegibilidad (artículo 3).

A este respecto, es necesario distinguir las inelegibilidades de las incompatibilidades; ambas difieren en su fundamento así como en sus consecuencias jurídicas. Las inelegibilidades se establecen en función de garantizar la libertad del elector, pretendiendo evitar que aquellas personas que se encuentren en un cargo público con competencia sobre el elector sean candidatos. En cambio, las incompatibilidades tienen como objetivo garantizar la libertad del elegido en su actuación parlamentaria. La regulación que sobre este extremo proporciona la normativa electoral no se atempera exactamente a estos criterios, debido, entre otras razones a su carácter provisional, así como a las especiales circunstancias que concurren en estas primeras elecciones.

El artículo 4, uno, recoge las inelegibilidades absolutas (Ministros del Gobierno; altos cargos nombrados por Decreto previa deliberación del Consejo de Ministros; Presidentes del Tribunal Supremo, del Consejo de Estado y del Consejo de Economía Nacional; miembros de las Fuerzas Armadas en todas sus categorías; miembros de las carreras judicial y fiscal, así como los de las Juntas Electorales; Gobernadores Civiles y Delegados del Gobierno de ámbito territorial; Jefes Superiores de Policía y Comisarios; Presidentes de los Sindicatos Nacionales y cargos sindicales no electivos de ámbito nacional; Presidentes y Delegados generales de las Entidades gestoras de la Seguridad Social; Presidentes y Directores de Organismos Autónomos con competencia en todo el territorio nacional).

El artículo 4, dos, establece las inelegibilidades relativas, es decir, aquellas que únicamente incapacitan para ser candidato en el distrito o distritos sobre los que se ejerce competencia, cuando ésta no es de ámbito nacional. Entre dichos inelegibles se encuentran los Presidentes de Diputación, Alcaldes y otros cargos de competencia territorial restringida.

Según el artículo 4, tres, toda persona que ostente uno de los mencionados cargos habrá de renunciar a los mismos en los ocho días siguientes a la convocatoria de elecciones para poder ser candidato. La toma de posesión de alguno de esos cargos desde esa fecha hasta la celebración de las elecciones también será objeto de inelegibilidad.

La incompatibilidad no impide la concurrencia a las elecciones, sino que obliga a la persona incurso en ella a optar entre el cargo declarado incompatible y el de diputado o senador. Su regulación no es propia de una ley electoral, dado que no afecta al desarrollo de las elecciones, produciéndose su existencia en un momento posterior: la constitución de las Cámaras; su inclusión en la normativa electoral obedece a derogar la, hasta ahora vigente (aunque todavía no aplicada), ley de incompatibilidades de 31 de julio de 1975, y a la implantación de un nuevo sistema. El artículo 4,5 establece la incompatibilidad de todos los inelegibles absolutos, excepto los ministros del gobierno y cargos de designación por decreto previa deliberación del Consejo de Ministros. Respecto a los inelegibles relativos,

excepto los Presidentes de Diputación, Mancomunidades Insulares y Cabildos y Alcaldes de los Ayuntamientos, también son declarados incompatibles. Sobre el derecho de opción que asiste al incompatible, la normativa electoral distingue dos supuestos. En el caso de las incompatibilidades que se corresponden con las inelegibilidades absolutas, la opción es automática; es decir, la aceptación por un diputado o senador de alguno de dichos cargos, implica la renuncia al escaño correspondiente. Los inelegibles relativos declarados incompatibles, el plazo para efectuar la opción será aquel que medie entre la proclamación de electo y la constitución de la correspondiente Cámara.

2.^o *Directo*. El sufragio directo supone la elección de los representantes por el cuerpo electoral de forma inmediata, en contraposición al sufragio indirecto en el que el cuerpo electoral elige delegados o compromisarios que, a su vez, proceden a la elección de los representantes. Impuesto dicho carácter del sufragio por la Ley para la Reforma Política, la normativa electoral, aunque no de forma expresa, lo reconoce en el artículo 20, 3 para el Congreso y en el 21, 2 para el Senado.

3.^o *Secreto*. El carácter secreto del voto se contrapone al de público, y al igual que las anteriores notas viene establecido en la Ley para la Reforma Política. Ahora bien, no basta con la declaración de tal carácter, pues dicha cualidad del voto es precaria si la emisión de éste no se encuentra rodeada de un conjunto de garantías. La normativa electoral establece al respecto una serie de medidas tendentes a asegurar el secreto del voto; así el artículo 54, 2, indica que el elector “podrá elegir las papeletas electorales e introducirlas en los sobres dentro de alguna cabina de las que se hallaren dispuestas en los locales donde estén constituidas las mesas electorales” el artículo 23, 4, cuida de que los locales reúnan las debidas condiciones para asegurar el secreto del voto. Por su parte, el artículo 55 preceptúa que “las urnas, los sobres, las papeletas y los documentos a que se refieren estas normas se ajustarán al modelo oficial que por Decreto se determine”. Las condiciones que a este fin han de reunir dichos elementos ha sido regulado por el Decreto 876/1977 de 15 de abril. La normativa hasta aquí expuesta, tiende a garantizar el secreto del voto desde un punto de vista material; por su parte el artículo 83, 6 sanciona a todo funcionario público que voluntariamente, por acción u omisión, realice actos que tengan por objeto descubrir el secreto del voto, con la pena de arresto mayor y multa de diez mil a cien mil pesetas. Es necesario precisar que el artículo 78 y a los efectos de las sanciones electorales, considera funcionarios no sólo a los que el código penal establece como tales, sino también a todos los componentes de los distintos órganos de la administración electoral.

4.^o *Igual*. Se denomina de este modo al sufragio que responde al principio de “un hombre un voto”, o lo que técnicamente sería más exacto, idéntica capacidad cuantitativa en la emisión del voto por parte de todos los miembros del cuerpo electoral. Se contrapone, por tanto, al voto plural y al voto múltiple. La normativa electoral nada dice al respecto de forma expresa, pero dado que no

atribuye a ningún miembro del cuerpo electoral la posibilidad de votar en varios distritos (ni dentro de éste en varias secciones o mesas), y sanciona la acción de "votar dos o más veces en una elección o utilizar nombre ajeno para votar", deriva el carácter igual del voto.

Cuestión distinta a este respecto, es la desproporción que a causa de la distribución territorial de los escaños resulte entre el censo electoral de cada distrito y el número de representantes que elija. La problemática que plantean las desigualdades derivadas de la distribución territorial serán expuestas más adelante.

5.º *Libre.* Técnicamente se entiende por voto libre aquel en que el derecho a votar no se ve acompañado del deber legal de realizarlo. No empaña la libertad de voto desde un punto de vista jurídico el que se defina al sufragio como un deber moral o cívico. El derecho a votar deja de ser libre, y se convierte en obligatorio, cuando al no ejercicio del derecho acompaña una sanción. La normativa electoral no sanciona la abstención (aunque sí a aquellas personas que induzcan a ella, art. 86, 1). La libertad de voto implica también, aparte de la libertad de emitirlo o no emitirlo, la posibilidad de optar libremente entre las distintas opciones electorales presentadas (el establecimiento del sistema de candidatura única anula la libertad de sufragio). A este respecto el artículo 86, 2 sanciona aquellas conductas que vayan dirigidas a realizar actos con el objeto de cohibir o ejercer presión sobre lo electores para que ejerciten el derecho a votar, votando o dejando de hacerlo a candidaturas determinadas. Del mismo modo, el número 1 del citado precepto, sanciona a aquellos que "por medio de recompensas, dádivas, remuneraciones o promesas de las mismas, soliciten directa o indirectamente el voto de algún elector".

6.º *Personal.* Sufragio personal es aquel que sólo puede ser ejercido por su titular, no siendo susceptible de delegación o cesión. Impide, por tanto, el ejercicio del derecho de voto a través de apoderado o representante. A este respecto, el artículo 2, 2 indica que "el derecho de sufragio es personalísimo e intransferible", y el artículo 53 garantiza tal carácter al preceptuar que el derecho a votar se acredite mediante la demostración de la identidad, que será justificada según el artículo 54, 2 "mediante la exhibición del Documento Nacional de Identidad o de otros documentos acreditativos de la misma". Por su parte, el artículo 89, 6 sanciona aquellas personas que utilicen nombre supuesto para efectuar el voto.

La calificación de "personalísimo" que del derecho al voto da la normativa electoral, no parece la más adecuada a la naturaleza del sufragio, dado que el contenido de alguno de los derechos personalísimos, categoría propia del derecho privado, son susceptibles de ser objeto de apoderamiento con determinados requisitos, mientras que el derecho de sufragio no puede ser ejercido por otra persona distinta de su titular bajo ninguna forma ni circunstancia.

El carácter personal del voto, no quiere decir que haya de ser ejercido presencialmente por su titular al día señalado por la convocatoria electoral para la

votación, aceptándose según el artículo 57 de la normativa electoral, la posibilidad, bajo determinadas formas y requisitos, el voto por correo.

7. *Plurinominal.* Se denomina de esta forma al sufragio, cuando el elector en su distrito ha de elegir a varios candidatos, en contraposición al sufragio uninominal en que solamente ha de elegir a uno. Tanto para el Congreso como para el Senado, el sufragio es plurinominal en todos los distritos, excepto en los de Ceuta y Melilla para el Congreso, y Menorca, Ibiza-Formentera, Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, La Gomera-Hierro para el Senado (artículo 19).

III. La distribución del territorio

La Ley para la Reforma Política, en su disposición transitoria primera, estableció un número fijo de diputados al Congreso (350) y de senadores electivos (207, cuatro por cada provincia peninsular, tres por Mallorca, Gran Canaria y Tenerife, dos por Ceuta y dos por Melilla, y uno por Menorca, Ibiza-Formentera, Lanzarote, Fuerteventura, La Palma y La Gomera-Hierro). En cuanto al Congreso la misma norma señalaba que la distribución de la cifra de escaños indicada debería efectuarse en base a la determinación de un número fijo de diputados por provincia.

Respetando estos criterios, la normativa electoral dispone que el número fijo de diputados por provincia será de dos, más uno por cada 144.000 habitantes o restos de población superiores a 70.000 (Exposición de Motivos). El artículo 19 aplica dicho criterio con el siguiente resultado: siete provincias dispondrán de tres escaños, ocho de cuatro, seis de siete, cuatro de ocho, dos de nueve, dos de diez, Sevilla de doce, Valencia de quince, Madrid de treinta y dos y Barcelona de treinta y tres.

La Exposición de Motivos justifica el reparto elegido en base a que de esta forma “se suavizan en alguna medida los efectos de nuestra irregular demografía y se atiende a un mayor equilibrio territorial en la representación”. El mayor inconveniente que plantea el criterio seguido radica en el hecho de que, si bien se logra un mayor equilibrio territorial en la representación del Congreso, es a costa de un claro desequilibrio en cuanto a la importancia cuantitativa del voto entre los electores de las provincias con máxima y mínima demografía. Consecuencia de ello, y resaltando los casos extremos, se comprueba que Soria elegirá un diputado por cada 35.474 habitantes, mientras que Barcelona elegirá un diputado por cada 137.456 habitantes.

El mencionado criterio pierde en gran medida su justificación desde el momento en que, según la Ley para la Reforma Política, es al Senado a quien corresponde la representación de las entidades territoriales. Hubiera sido más lógico, desde un punto de vista técnico, suplir en la distribución de la representación en el Congreso de los Diputados los desequilibrios de representación que supone el sistema seguido en el Senado. No nos hemos de olvidar de que nuestro Estado es unitario, y los cauces señalados por la octava Ley Fundamental, hubieran po-

dido ser interpretados de forma más adecuada mediante la atribución de un escaño fijo por distrito electoral y el resto del número fijo señalado repartirlo proporcionalmente a la población. Técnicamente esta cuestión es más patente si partimos de la base de que la Ley para la Reforma Política establece un sistema bicameral igual.

Por último es necesario señalar que, como excepción a la regla general que establece la provincia como distrito electoral, también lo serán Ceuta y Melilla a los efectos de las elecciones al Congreso y al Senado, y Menorca, Ibiza-Formentera, Lanzarote, Fuerteventura, La Palma y Gomera-Hierro, al Senado.

Para la votación los distritos electorales se dividirán en Secciones y Mesas (arts. 22 y 24, 2), “cada término municipal contará por lo menos con una sección electoral, y ninguna de éstas comprenderá áreas diferentes a distintos términos electorales”.

IV. Los sistemas electorales

Tanto la distribución del territorio como el sistema a seguir en la distribución de escaños entre los distintos candidatos a la vista de los resultados de la votación, siendo en principio cuestiones técnicas, tienen una incidencia no desdeñable sobre los resultados definitivos de la misma. A estos efectos, la Ley para la Reforma Política establece el sistema proporcional para el Congreso de Diputados (incorporando dos principios correctores: el número fijo de diputados por provincia —distrito electoral—, ya visto, y la necesidad de obtener cada lista un número mínimo de sufragios para poder participar en la distribución de escaños, que se fija en el tres por ciento de los votos válidamente emitidos en el distrito de que se trate —art. 20, 4, b—); los senadores habrán de ser elegidos por el sistema mayoritario. Pasamos a exponer ambos sistemas, comenzando por el establecido para el Senado (mayoritario) por ser el sistema proporcional (Congreso) de más fácil comprensión a partir del mayoritario.

1.º El sistema electoral para las elecciones al Senado. El sistema mayoritario de voto limitado. La Ley para la Reforma Política en su disposición transitoria primera, estableció el sistema mayoritario para el Senado sin hacer mayores precisiones al respecto.

Desde un punto de vista doctrinal, se denominan sistemas mayoritarios a aquellos que atribuyen la totalidad de los puestos a cubrir a los candidatos que hayan obtenido mayor número de votos en su respectivo distrito. El problema técnico que se plantea es que dicho sistema favorece a las formaciones políticas mayoritarias en detrimento de las minoritarias que resultan infrarepresentadas en relación al número de votos obtenidos. Con todo, existen dentro de este sistema variantes tendentes a evitar, o al menos disminuir dichos resultados. Nada decía al respecto la Ley para la Reforma Política, dejando en consecuencia libertad al Gobierno entre los distintos subsistemas posibles.

La normativa electoral reintroduce el subsistema de voto limitado, que es aquel que respetando el principio de mayorías, asegura parte de los escaños a las minorías. Ahora bien, dicha representación a las minorías no se efectúa en base a criterios de proporcionalidad, sino en base a criterios empíricos, reservando a priori un determinado número de escaños a los sectores minoritarios del electorado, a través del procedimiento de solamente permitir al elector que vote a un número de candidatos inferior al que le correspondería elegir en su distrito. Otro sistema empírico que pretende los mismos fines, pero de distinto modo, es el voto acumulado, que otorga a cada elector tantos votos como candidatos han de ser elegidos en el distrito, permitiéndole concentrar dichos votos en un solo candidato.

La citada normativa electoral en su artículo 22, 2 establece que, para las elecciones al Senado “los electores sólo podrán dar su voto a un máximo de tres entre los candidatos proclamados en el distrito”, dado que en los distritos ordinarios el número de senadores a elegir es de cuatro, se reserva uno de dichos escaños a la minoría.

Incomprensiblemente, desde un punto de vista técnico, la Exposición de Motivos denomina a este subsistema mayoritario como “voto restringido”, lo cual es inexacto, e induce a confusión. Sufragio o voto restringido como ya se ha visto, se contraponen a sufragio universal, y éste se encuentra recogido en la Ley Fundamental para la Reforma Política, y desarrollado en la propia normativa electoral. Se trata de sufragio limitado.

Este sistema fue propuesto por primera vez por Condorcet en su “Plan de Constitución” que presentó a la Convención en 1793, pasando en el transcurso del siglo XIX a varias legislaciones positivas. La Ley Electoral de 1907 incorpora tal sistema a nuestro derecho electoral en su artículo 21, al preceptuar “En los distritos en que deba elegirse un diputado..., cada elector no podrá dar válidamente su voto más que a una persona: cuando se elija a más de uno, hasta cuatro, tendrá derecho a votar uno menos de los que hayan de elegirse, o dos menos si se eligieran a más de cuatro, o tres menos si se eligieran más de ocho y cuatro menos si se eligieran a más de diez”.

El voto limitado ofrece indudables ventajas sobre el sistema mayoritario simple, pero también tiene importantes inconvenientes si se le compara, técnicamente, con el sistema proporcional. Entre las ventajas se encuentran las siguientes: a) simplicidad del procedimiento; b) posibilidad del elector de formar su propia lista, y c) por último, al reservar un número de puestos a la minoría, se favorece la consolidación de una mayoría cualificada.

Entre los inconvenientes destacan los siguientes: a) Cuando en un distrito exista una mayoría muy cualificada, y con un electorado muy disciplinado puede ocupar todos los escaños destruyendo la limitación del voto. En nuestra terminología electoral tradicional se denominaba a tal circunstancia (presentar tantos candidatos como el número total a elegir por el distrito) “ir al copo”. Indudable-

mente tal actitud electoral por parte del partido encierra riesgos, pues al dividir a su electorado puede perder los puestos de la mayoría y los de la minoría. b) Una minoría puede obtener una representación excesiva en relación con los seguidores de que dispone en el distrito de que se trate. c) En el supuesto de que existan varias minorías en el distrito, únicamente obtendrá representación una de ellas. 4) A pesar de que se reserva un número de escaños a la minoría, dada la posibilidad que tiene el elector de confeccionar su propia lista entre los distintos candidatos, puede llegarse en la práctica a que se produzca un reparto de votos que no se logre una diferenciación sustancial entre mayoría ni minoría.

Podríamos concluir el comentario referente a este apartado, indicando que la intención del legislador no fue otra que pretender aplicar correctores a los resultados que derivarían de establecer un sistema mayoritario simple. A este respecto, la Exposición de Motivos de la normativa electoral señala, “Dentro del sistema electoral mayoritario se ha optado por la modalidad de sufragio restringido, de manera que cada elector pueda votar hasta tres candidatos, obteniendo los cuatro escaños correspondientes a cada distrito quienes hayan conseguido mayor número de sufragios. Se respeta así el criterio de la Ley para la Reforma Política, a la vez que se arbitran técnicas para garantizar el respeto y representación de las minorías, lo que es esencial a la democracia”.

2.º El sistema electoral para la elección de los diputados: Sistema proporcional; el sistema d'Hondt. La Ley para la Reforma Política preceptuaba que las elecciones para el Congreso deberían regirse por un sistema electoral proporcional estableciendo los principios correctores más arriba descritos. Respecto al sistema proporcional se ha de señalar que es aquel que pretende establecer, en nuestro caso a nivel de distrito, la mayor proporción posible entre el número de votos obtenidos por cada candidatura o lista de candidatos y el número de escaños que se le atribuyan. Para que exista proporcionalidad, por tanto, es imprescindible que el sufragio sea plurinominal, pues de no ser así fallaría uno de los elementos para establecer la proporción deseada. Entre los sistemas proporcionales el más sencillo es el del cociente electoral. Dicha cifra es el resultado de dividir el número de votos válidamente expresados en el distrito por el número de puestos a cubrir en el mismo. Hallada esa cifra se procede a dividir el número de votos obtenidos por cada lista por dicho cociente electoral y el resultado que nos dé será el de escaños que le corresponden, haciendo caso omiso a los decimales, dado que los escaños son indivisibles. El problema que plantea tal sistema es que fácilmente quedarán puestos sin cubrir y votos sin representación, con lo cual será imprescindible proceder a un segundo reparto o distribución de los escaños sobrantes entre las listas con votos también sobrantes y sin representación. En esta distribución de restos se puede a su vez seguir fundamentalmente dos sistemas: el del resto más fuerte y el de la media más fuerte. Como su mismo nombre indica, el primer sistema consiste en atribuir sucesivamente los puestos que queden sin cubrir en el primer reparto, a aquellas listas cuyo número de votos sin representación sea más elevada. Por el contrario, el sistema de la media más fuerte, es aquel en que se atribuyen, también sucesivamente, los escaños so-

brantes en el primer reparto a aquellas listas que obtengan una cifra mayor, como resultado de dividir su número de votos obtenidos por el número de puestos a cubrir en el distrito de que se trate.

Quizá pueda parecer prolija esta introducción antes de entrar a analizar el sistema que nuestra normativa electoral propone, pero creemos que difícilmente se puede entender su repercusión electoral sin comprender bien los conceptos antes expresados.

El sistema que nuestra ley electoral establece, es el descrito por primera vez en 1878 por el matemático belga V. d'Hondt y que desarrolló de forma completa en una monografía publicada en Bruselas en 1882. Dicho sistema aventaja al más arriba expresado del cociente electoral en que resume en una sola operación lo que en aquel habría de efectuarse en dos (primera distribución y reparto de restos). Con el sistema d'Hondt no quedan restos (es decir, puestos sin cubrir y votos sin representación simultáneamente). El resultado al que conduce, como indica la Exposición de Motivos, es el mismo que si se efectuara la distribución por el sistema de cociente electoral repartiendo los restos por la media más fuerte.

Nuestra normativa electoral expresa este sistema en el artículo 20; 4, c) del siguiente modo:

“c) Se dividirá el total de votos obtenidos por cada lista por uno, dos, tres, etcétera, hasta un número igual al de escaños correspondientes al distrito, formándose el cuadro que aparece en el ejemplo práctico. Los escaños se atribuirán a las listas a los que correspondan en el cuadro los mayores cocientes, procediéndose a esa atribución por orden decreciente de éstos.”

**Ejemplo práctico: 480.000 votos válidos emitidos
en un distrito que elija ocho Diputados**

Votación repartida entre seis listas:

A (168.000 votos), B (104.000), C (72.000), D (64.000), E (40.000), F (32.000)

División	1	2	3	4	5	6	7	8
A	166.000	84.000	56.000	42.000	33.600	28.000	24.000	21.000
B	104.000	52.000	34.666	26.000	20.800	17.333	14.857	13.000
C	72.000	36.000	24.000	18.000	14.400	12.000	10.285	9.000
D	64.000	32.000	21.333	16.000	12.800	10.666	9.142	8.000
E	40.000	20.000	13.333	10.000	8.000	6.666	5.714	5.000
F	32.000	16.000	10.666	8.000	6.400	5.333	4.571	4.000

Por consiguiente: La lista A obtiene cuatro escaños; la lista B, dos escaños, y la C y D, un escaño cada una.

El procedimiento seguido para la expresión legal, siendo exacto en los resultados, es confuso desde el momento en que no queda claro cuál es el fundamento de la distribución efectuada. El sistema d'Hondt se basa en hallar el divisor electoral o denominador común, cuya cifra, al dividir el número de votos obtenidos por cada lista, nos dará (prescindiendo de decimales por la razón antes expuesta) el número de puestos que corresponde a cada lista, sin que nos queden sin cubrir ninguno.

Toda la operación que se recoge en el ejemplo práctico va dirigida a la determinación del divisor electoral antes mencionado, y que, en el mismo, no es otro que el cociente 42.000 correspondiente a la lista A. Divídase el número de votos obtenidos por cada lista y hallaremos el número de puestos que a cada una corresponde. El resultado es el mismo, pero no se manifiesta con claridad el fundamento de la distribución efectuada. Hubiera sido quizá más correcto preceptuar que el número de escaños correspondientes a cada lista sería la cifra resultante de dividir el número de votos obtenido por cada una de ellas, por el divisor electoral o denominador común y, a continuación, señalar el procedimiento para hallar dicha cifra. Planteada así la cuestión no habría lugar al sistema que el artículo 20, 5 establece para la resolución de empates, pues los que se produzcan en el momento de clasificar decrecientemente los cocientes resultantes son irrelevantes. El único empate que importa es el que se produzca al hallar el divisor electoral o común denominador. Con haber resuelto ese empate era suficiente.

El sistema d'Hondt ha sufrido diversas correcciones en su aplicación práctica en las legislaciones positivas, por lo que interesa poner de relieve que el seguido por nuestra normativa electoral es denominado "puro", que tiene como consecuencia favorecer al partido con mayor número de votos en el distrito de que se trate (al igual que el sistema de cociente electoral con distribución de restos por la media más fuerte), por ello es exacta la afirmación de la Exposición de Motivos de la normativa electoral cuando afirma que se trata de un "poderoso corrector del excesivo fraccionamiento de las representaciones parlamentarias".

V. La administración electoral

La organización y el desarrollo de las distintas operaciones electorales se encomienda a las Juntas electorales que "se denominarán, Central, Provinciales y de Zona", teniendo la primera competencia en el ámbito nacional, las segundas en la demarcación de su nombre y las terceras en los partidos judiciales a que se correspondan.

Respecto a su composición, se distinguen tres tipos de miembros: miembros de la carrera judicial, representantes de corporaciones jurídicas y docentes y el propio electorado (en las Juntas Central y Provinciales, propuestos por las fuerzas políticas participantes en las elecciones, y en las de Zona, por sorteo entre los electores); según la Exposición de Motivos "de esta manera se pretende que

los Organos encargados de la Administración Electoral acojan en su seno a quienes mejor puedan asegurar la absoluta imparcialidad”.

Las funciones de las mencionadas Juntas Electorales, cada una en su ámbito territorial propio, se podrían resumir en las siguientes: administración del Censo Electoral, organización de las secciones y mesas electorales, dirección del procedimiento electoral, control sobre el ejercicio de las libertades públicas durante el periodo electoral, escrutinio general y proclamación de electos.

Todo lo relativo a su composición, atribuciones y funcionamiento, se encuentra regulado en el capítulo I del título II de la normativa electoral.

VI. El procedimiento electoral

Desde el punto de vista dinámico, el desarrollo de las elecciones se compone, resumidamente, de las siguientes etapas y actuaciones:

1. *Convocatoria.* Señala el comienzo del periodo electoral y se “efectuará por Real Decreto acordado en Consejo de Ministros a propuesta del Presidente del Gobierno, y entre la fecha de su publicación y la celebración de las elecciones deberá mediar un plazo mínimo de cincuenta y cinco días (art. 28, 1), debiendo dársele la máxima publicidad (art. 28, 2). La fecha de la convocatoria de elecciones tiene una excepcional importancia, pues a partir de ella se computa todo el sistema de plazos para la realización de las distintas operaciones electorales. A este respecto, según la disposición final segunda “para el cómputo de los plazos y términos a que se refiere el presente Real Decreto-Ley los días se entenderán siempre como días naturales, salvo que otra cosa se disponga expresamente”.

2. *Constitución de las Juntas Electorales.* Habrá de efectuarse provisionalmente en los siete días siguientes a la convocatoria, y definitivamente en el plazo de otros siete días (art. 12, 3).

3. Determinación por las Juntas Electorales Provinciales de las Secciones electorales (art. 22, 2) y formación de las Mesas electorales (arts. 24 a 27).

4. *Presentación de candidatos,* presentación de candidatos, que habrá de efectuarse entre el undécimo y vigésimo día a la convocatoria de las elecciones (art. 30). Estarán capacitados para efectuar dicha presentación, las Asociaciones y Federaciones inscritas en el Registro creado por la Ley de Asociación Política, las coaliciones que se formen entre dichas Asociaciones y Federaciones, y los electores del distrito, agrupados a este fin en número no inferior al uno por mil del cuerpo electoral del distrito, y en ningún caso inferior a quinientos (art. 30, 3). La presentación habrá de efectuarse ante la Junta provincial correspondiente.

5. *Proclamación de candidatos:* Se efectuará por las Juntas Electorales Provinciales a los treinta días de la convocatoria oficial, desestimando aquellas que adolezcan de algún defecto de formulación, incumpliendo la normativa electoral al respecto (art. 33, 1 y 2). El acuerdo denegatorio de la proclamación, podrá ser objeto de recurso electoral ante las salas de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia territorial donde se halle el distrito electoral (art. 73, 1 y 2).

6. *Campaña electoral:* Según el artículo 37, 1 de la normativa electoral, se entiende por campaña electoral: “El conjunto de actividades lícitas organizadas y desarrolladas por los partidos, las federaciones, las coaliciones, las agrupaciones de electores y los candidatos en orden a la capacitación de sufragios.”

La regulación de la campaña electoral, según la Exposición de Motivos, obedece a dos principios: “La igualdad de oportunidades de todos los contendientes, asegurada a través de todos los medios informativos de titularidad pública y de la adecuación de espacios y lugares idóneos para la propaganda electoral, y el control por quienes administran el proceso electoral de toda la campaña, e incluso de los gastos por ella ocasionados, a fin de que ninguna libertad pueda ser inhibida por el abusivo ejercicio de la libertad ajena.”

Los artículos 44 a 48 regulan aspectos relativos a los gastos electorales.

7. *Constitución de las Mesas:* Se efectuará a las ocho horas del día señalado para la votación, procediendo inmediatamente a recibir las credenciales de los interventores, que pasarán a formar parte de la misma, no pudiendo aceptarse más de dos interventores por lista, levantándose a continuación acta de la constitución de la mesa (arts. 49 y siguientes).

8. *Votación:* Se iniciará a las nueve horas y terminará a las veinte horas del día señalado para la elección. Tanto el procedimiento para la misma como las garantías que han de rodear el secreto y la libertad de voto, se encuentran reguladas en los artículos 52 a 63. La votación para el Congreso y para el Senado se realizarán en el mismo acto, utilizando sobres distintos a tal fin.

9. *Escrutinio:* Se efectúa en dos fases: la primera, a nivel de sección, de acuerdo con las normas contenidas en los artículos 64 a 66. Según el artículo 64, 6 “hecho el recuento de votos, preguntará el Presidente (de la Mesa) si hay alguna protesta que hacer contra el escrutinio, o no habiéndose hecho, o después de resuelta por la mesa las que se presentaren, anunciará en alta voz el resultado, especificando el número de votantes, el de papeletas leídas, el de papeletas válidas, el de papeletas en blanco, el de papeletas nulas y el de votos obtenidos por cada candidatura”. Inmediatamente después “se destruirán en presencia de los concurrentes, excepto aquellas a las que se les hubiera negado validez, que se incorporarán al acta rubricadas por los componentes de la mesa y serán archivados por

ella. El acta de la elección recogerá todos los extremos indicados en el artículo 66, 1 y con la documentación que ha de acompañarla, se entregará al Juez Municipal o Comarcal, quien en el plazo de diez horas la hará llegar a la Junta Electoral Provincial.

El escrutinio general lo efectuará la Junta Electoral Provincial, el quinto día hábil siguiente al de la elección. En presencia de los representantes de las candidaturas, que podrán formular las reclamaciones a que hubiere lugar, se efectuará el recuento sección por sección y se procederá a adjudicar los escaños al Congreso a las distintas listas, de acuerdo con el sistema d'Hondt, antes expuesto, y proclamar Senadores electos a aquellos que hubieren obtenido mayor número de votos según lo preceptuado en el artículo 21 (art. 69).

La Junta Electoral Provincial expedirá a los Senadores y Diputados electos las credenciales expresivas de su proclamación como tales ante las Cortes; así mismo, se remitirán a la Junta Electoral Central las relaciones de Diputados y Senadores electos, quien a su vez remitirá a las Cortes la relación de Diputados y Senadores proclamados en todo el territorio nacional.

VII. El contencioso electoral

En nuestro derecho histórico, correspondía el contencioso electoral a las propias Cortes, siendo regulado su procedimiento en los correspondientes Reglamentos de las Cámaras parlamentarias, bajo la denominación de “verificación de poderes”. Nuestra más reciente legislación encomendaba a las Juntas Electorales Central y Provinciales, la resolución de las impugnaciones que se produjeran.

La normativa electoral que comentamos, por el contrario, sigue un sistema judicial, encomendando el contencioso electoral a una serie de controles estrictamente judiciales “que pretenden asegurar la defensa de la legalidad en todo el proceso electoral, de manera que sean los jueces quienes en último término decidan sobre la proclamación o no de las candidaturas..., y sobre la proclamación de los resultados en las elecciones” (Exposición de Motivos).

VIII. Delitos e infracciones electorales

Por afectar el contenido del título VIII de la normativa electoral tanto a nuestra disciplina como al derecho Penal, se incluye el texto íntegro de dicho título en la Sección legislativa de este Boletín, por lo que omitimos cualquier comentario.

IX. Conclusión

Si hemos de dar una visión general, escueta y apresurada de la norma que se ha intentado exponer, se podría llegar a las siguientes conclusiones:

1. Dispone de las ventajas propias de las normas unitarias y completas frente a la enorme complejidad normativa de la legislación inmediatamente anterior.

2. Se aprecia una clara preocupación por las garantías electorales, sobre todo en lo relativo al secreto y libertad del sufragio, aplicando las técnicas más recientes en el Derecho Comparado.

3. A la vista de las limitaciones impuestas por la Ley para la Reforma Política, en cuanto a los sistemas electorales, resulta paradójico que en la aplicación de principios correctores para el Congreso no se hubieran utilizado los mínimos posibles, mientras que, sin exigirlo la citada Ley Fundamental, se han aplicado principios correctores al sistema mayoritario, estableciendo un sistema empírico de signo minoritario (voto limitado).

4. La normativa electoral es deficiente, desde un punto de vista técnico, a la hora de regular el sistema electoral para el Congreso (sistema d'Hondt) al igual que en la Exposición de Motivos califica de restringido al sufragio limitado que establece.

5. Constituye un acierto la fórmula empleada para desvincular la Administración Electoral de la Administración Pública y el Gobierno.

6. El encomendar el contencioso electoral a la Jurisdicción Contencioso Administrativa, supone una garantía de imparcialidad y, por ende, el poder judicial sustrae dicho tema de capital importancia, al empleo de otros sistemas más proclives a la intervención en sus decisiones de factores ajenos al propio desenvolvimiento de la elección.

7. Si bien la norma expuesta no tiene vocación de futuro, como decimos al principio de este comentario, contiene partes que pueden y deben pasar a legislaciones electorales futuras.

Faustino Fernández-Miranda Alonso

HACIENDA PUBLICA I

El "Boletín Oficial del Estado" de 28 de febrero de 1977 publica el Real Decreto-Ley 15/1977, por el que se adoptan una serie de medidas fiscales, financiera y de inversión pública aprobadas por el Gobierno en relación con su Programa de Actuación Económica.

Un análisis básico permite diferenciar los siguientes grupos de medidas tratadas en la disposición que se comenta:

A) Régimen de tributación de los grupos de sociedades

Hay un indudable avance en el tratamiento de esta realidad de nuestro mundo económico.

Como norma general, si entre los ingresos sujetos al Impuesto sobre Sociedades figurasen dividendos de otras sociedades gravadas por este impuesto, se deducirá de la cuota la parte proporcional de la misma, correspondiente al 42 por 100 de dichos dividendos (esta deducción era únicamente del 33 por 100 con anterioridad).

La deducción mencionada en el párrafo anterior se eleva al 58 por 100 para el caso de sociedades residentes en España que participen directamente, al menos en el 25 por 100, en el capital de otras sociedades también residentes en España, e incluso filiales extranjeras, si bien en este último caso habrán de cumplirse determinadas condiciones y límites pendientes de establecerse. En el caso de sociedades de seguros, ahorro y crédito en general, la deducción alcanzará el 100 por 100.

La base imponible y los demás elementos determinantes del Impuesto sobre Sociedades correspondientes al Grupo de Sociedades, podrán calcularse mediante la consolidación —terminología que se recibe en el Derecho Tributario prácticamente ahora— de sus balances y cuentas de resultados, de acuerdo con las siguientes normas:

Se considera Grupo de Sociedades al conjunto de sociedades anónimas dominado por una de ellas, que siendo residente en España, posea, directa o indirectamente, más del 50 por 100 del capital social de las demás (sociedades dependientes), residan o no en España.

La sociedad dominante, contando con el acuerdo social de las sociedades integrantes del grupo, deberá efectuar la petición al Ministerio de Hacienda, quien podrá aceptarla o denegarla.

De no existir la solicitud mencionada anteriormente, el Ministerio de Hacienda podrá exigir la presentación del balance y cuenta de resultados consolidados a determinados grupos, sin que ello comporte la aplicación del régimen de tributación consolidada, en el cual la base se calculará, aplicando el régimen de estimación directa y subsidiariamente el de jurados tributarios; anunciándose normas especiales para las transmisiones inter-grupo.

El sistema de “balance consolidado” alcanza a la determinación de las cuotas tributarias, y al régimen de compensación de pérdidas.

Resulta del mayor interés el anuncio de que la distribución de dividendos, así como cualquier otra operación o transacción sujeta al Impuesto sobre las Rentas del Capital que realicen entre sí las sociedades del grupo consolidable, gozará de exención de dicho impuesto en las condiciones que reglamentariamente se determinen.

Demasiadas esperas —todas ellas llenas de interés— al reglamento.

B) Fiscalidad de las sociedades inmobiliarias

Nuevas medidas de fomento a la inversión en este sector.

Se deroga el régimen tributario hasta ahora vigente y que tuvo su inicio en la Ley de 16 de diciembre de 1940.

Se reducirá la base imponible del impuesto, en la parte que proceda, de los rendimientos del arrendamiento de viviendas que se construyan en el futuro, siempre y cuando se respeten ciertas condiciones técnicas y no se establezcan cuentas en participación a efectos de construcción y explotación. Se asimilan a las viviendas entre otros, los hoteles, colegios y escuelas.

En la misma forma se reducirá la base imponible en la parte de la misma que proceda de la venta de “viviendas sociales” a que se refiere el Real Decreto-Ley 12/1976.

Quedarán exentos de este impuesto los dividendos o participaciones en beneficios que distribuyan las sociedades protegidas, por la parte que corresponda a rendimientos exentos del Impuesto sobre Sociedades, según lo indicado anteriormente.

C) Regulación general de las empresas de “leasing”

Se adopta la terminología de “arrendamiento financiero”.

Se considerarán operaciones de arrendamiento financiero todas aquellas que, cualquiera que sea su denominación, consistan en el arrendamiento de bienes de equipo capital productivo y vehículos, adquiridos exclusivamente para dicha finalidad por empresas de “leasing” y según las especificaciones señaladas por el futuro usuario, siempre que incluyan una opción de compra a favor del usuario al término del arrendamiento. Los plazos y demás condiciones que debe cumplir la contratación se determinarán reglamentariamente.

Para tener la consideración de empresas de arrendamiento financiero, deberán cumplirse los siguientes requisitos:

- a) Ser sociedad anónima domiciliada en el territorio nacional.
- b) Tener como objeto exclusivo el ejercicio de operaciones de arrendamiento financiero.
- c) Tener un capital desembolsado mínimo de cien millones de pesetas.
- d) Estar inscrita en el correspondiente registro del Ministerio de Hacienda.

El arrendador deberá amortizar el coste de su inversión, deducido el valor residual, durante la vigencia de los respectivos contratos. A este efecto, podrán utilizarse cualesquiera de los criterios establecidos en las correspondientes normas del Plan General de Contabilidad.

El arrendatario podrá considerar gasto fiscal la total cuota que satisfaga a la sociedad de arrendamiento financiero, así como, posteriormente, amortizar el precio de adquisición, si ejerciese la opción de compra.

Los rendimientos e intereses que estas empresas obtengan por el ejercicio de su actividad estarán exentos del impuesto sobre las rentas de Capital en cuyo impuesto las empresas de "leasing" podrán obtener una bonificación de hasta un 95 por 100 de las cuotas que correspondan a los rendimientos de préstamos que concierten con organismos internacionales e instituciones financieras extranjeras, siempre que los fondos se destinen a operaciones de arrendamiento financiero de actividades de *preferente interés económico*.

En el impuesto sobre el Tráfico de Empresas, la base en las operaciones de arrendamiento financiero, vendrá constituida por la diferencia entre las cantidades que perciba el arrendador y la correspondiente cuota de amortización indicada anteriormente.

Las ventas que se originen como consecuencia de los contratos de arrendamiento tendrán la consideración de ventas de mayoristas, tomándose como base el precio fijado para el ejercicio de la opción de compra.

Cuando tenga lugar una venta de un bien a una empresa de "leasing" y, simultáneamente, su arrendamiento al vendedor, la base a efectos de este impuesto vendrá dada por el precio real de dicha venta.

Las opciones de compra insertas en los contratos quedan exentas de impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

La actividad de estas empresas se incluirá bajo un *nuevo epígrafe* dentro de las actuales tarifas del Impuesto Industrial.

D) Otro tipo de medidas

1. En los sectores de banca y de seguros, las empresas necesariamente no tendrán que materializar las cantidades destinadas a la Previsión para Inversiones en cuenta corriente en el Banco de España, sino que podrán hacerlo también en los títulos y valores mobiliarios que contempla el régimen general.

Se establece como plazo para que efectúen la inversión final en activos fijos calificados el de los cinco ejercicios siguientes a aquel en el que se haya realizado la materialización indicada en el párrafo anterior.

2. Es importante la aceptación fiscal de las insolvencias, en cuyo aspecto tendrán la consideración de gasto fiscal a efecto del Impuesto sobre Sociedades y del Industrial, Cuota de Beneficios, las dotaciones que se destinen a la Previsión para las Insolvencias, con los límites que se establezcan por sectores y actividades.

Esta previsión será incompatible con la de créditos de dudoso cobro y con el fondo de autoseguro de créditos, ya contemplados a la legislación vigente.

3. La Regularización y las empresas no cotizadas.—Las sociedades y entidades jurídicas cuyo capital no esté representado por acciones, o que estándolo no coticen en bolsa, podrán aumentar su capital, hasta el 31 de diciembre de 1978, cargando hasta un 60 por 100 del importe del aumento a la Cuenta “Regularización Decreto-Ley 12/1973, de 30 de noviembre”.

Para poder proceder en al forma indicada en el párrafo anterior, será necesario que la Administración haya comprobado la Regularización de Balances y que el resto de la ampliación se efectúe mediante aportaciones efectivas de los accionistas, desembolsándose al menos un 25 por 100 del total aumento, en el momento de la ampliación. La ampliación de capital efectuada en la forma descrita, estará exenta de todos los tributos que le afecten, exceptuando el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

El importe de los títulos o aportaciones liberadas que, con cargo a la Cuenta, reciban las personas físicas, sociedades y demás entidades jurídicas, no constituirá ingreso a efectos de los impuestos a cuenta, ni a efectos de los Impuestos Generales sobre la Renta.

4. Nuevo impulso a las medidas de “apoyo fiscal” (Decreto-Ley 11/76).

Desde la publicación de aquel Real Decreto-Ley las entidades y personas físicas sujetas, respectivamente al Impuesto sobre Sociedades y al Impuesto Industrial, Cuota de Beneficios, viven autorizadas a deducir de las cuotas de dichos impuestos el 10 por 100 de las inversiones que realicen.

Su aplicación se limita a las industrias situadas en determinadas áreas o sectores de especial interés para la economía nacional (zonas de preferente localización industrial, industrial-agraria, polígonos industriales, polos de promoción y desarrollo y áreas de expansión industrial, o los siguientes sectores: Minería, siderurgia, industrias alimentarias y agrarias, armadores de buques y pesqueros).

HACIENDA PUBLICA II

Régimen de determinadas liquidaciones tributarias

La Orden de 22 de noviembre de 1976 ("B.O.E." del 6 de diciembre) desarrolla el Real Decreto 1.920/1976, de 16 de julio, del que se dio noticia en el Boletín núm. 0 de febrero del presente año, pág. 15. Véase la disposición en la sección "Crónica legislativa" del presente Boletín.

(Esta disposición modifica y amplía el Tema XIV, Unidad Didáctica 3, págs. 35 y siguientes).

Apoyo fiscal a la inversión

El Real Decreto 3.027/1976, de 12 de noviembre ("B.O.E." del 13 de enero de 1977) desarrolla las normas para la aplicación del apoyo fiscal a la inversión establecido por el artículo 4.º del Real Decreto-Ley 11/1976, de 30 de julio, del que se dio noticia en el Boletín núm. 0 de febrero del presente año, págs. 18-19 Y 21. Se refiere al Impuesto Industrial y al General sobre la Renta de las Sociedades. La disposición se transcribe en la sección "Crónica Legislativa" del presente Boletín.

(Afecta al Tema XXVI, Unidad Didáctica 5, pág. 51, en lo referente al Impuesto Industrial y al Tema XXVII de la misma Unidad Didáctica, pág. 86, en lo que respecta al Impuesto de Sociedades.)

Impuesto sobre la Renta de las Sociedades

El Real Decreto-Ley 15/1977 de 25 de febrero regula la tributación de los grupos de Sociedades derogando el artículo 22 del Texto Refundido del Impuesto de Sociedades. Esta disposición se transcribe en la sección "Crónica Legislativa" del presente Boletín.

(Modifica y amplía el Tema XXVII, Unidad Didáctica 5, pág. 78.)

Impuesto sobre el Tráfico de las Empresas

El Real Decreto-Ley 15/1977 de 25 de febrero ("B.O.E." del 28 de febrero) regula el régimen tributario de las sociedades "leasing". Se transcribe en la sección "Crónica legislativa del presente Boletín".

(Esta disposición amplía el tema XXVII, Unidad Didáctica 6, pág. 59.)

Exenciones y bonificaciones

La Ley 6/1977, de 4 de enero, de Fomento de la Minería, concede diversos incentivos y bonificaciones a las personas físicas y jurídicas que desarrollen actividades de exploración, investigación, explotación o beneficio de yacimientos minerales y demás recursos geológicos clasificados en la sección c), punto 1, del artículo 3.º de la Ley de Minas, así como de los que, por Decreto, pueda el Gobierno determinar con carácter general entre los incluidos en las secciones A) y B) del artículo citado.

- Gozarán, en la parte correspondiente a sus inversiones en activos mineros, la libertad de amortización durante diez años a contar desde la entrada en vigor de esta Ley.
- Además se conceden a estas mismas personas físicas o jurídicas, bonificaciones relativas a los siguientes impuestos:
 - a) Impuesto General sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
 - b) Derechos arancelarios, Impuesto General sobre el Tráfico de las Empresas e Impuesto de Compensación de Gravámenes Interiores que graven la importación de bienes de equipo y utillaje, cuando no se fabriquen en España.
 - c) Impuesto sobre las Rentas del Capital.
 - d) Cuota de Licencia Fiscal del Impuesto sobre Actividades y Beneficios Comerciales e Industriales durante el período de instalación.

En consecuencia, deben tenerse presentes estas exenciones al estudiar los temas correspondientes a los impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y actos jurídicos documentados, Derechos arancelarios, Impuestos sobre el Tráfico de las Empresas, Impuesto de Compensación de Gravámenes Interiores, Impuesto sobre las Rentas del Capital, Cuota de Licencia Fiscal del Impuesto Industrial.

Con independencia de los beneficios fiscales antes indicados se establece el régimen de factor de agotamiento que deberá tenerse en cuenta al estudiar el Impuesto sobre Sociedades y el Impuesto Industrial (cuota de beneficios).

Las disposiciones de la presente Ley correspondientes a este régimen tributario especial se transcriben en la sección "Crónica Legislativa" de este Boletín.

DERECHO DEL TRABAJO

En este número del "Boletín Informativo" de la Facultad de Derecho, pretendemos hacer un breve comentario sobre la normativa laboral recientemente publicada, que aparte de su importancia *per se*, afecta a determinados temas de las Unidades Didácticas de la asignatura.

Nuestro primer estudio se va a centrar en el Real Decreto-Ley de 4 de marzo de 1977 ("B.O.E." 9 de marzo) sobre relaciones de trabajo. Este importantísimo Decreto-Ley, ha venido a introducir sustanciales modificaciones en la normativa laboral hasta ahora vigente, en aspectos tan esenciales como el Derecho de huelga, Convenios Colectivos de Trabajo, Reglamentación de Trabajo, despidos y el procedimiento para la reestructuración de plantillas.

De otro lado, este Decreto-Ley viene a completar la importante Ley de Relaciones Laborales de 8 de abril de 1976, modificándola en algunos aspectos; así, el famoso artículo 35 de la Ley de Relaciones Laborales relativo al despido, y que a tantos debates parlamentarios dio lugar, ha sido derogado totalmente por esta nueva norma, dejando sin vigor la suspensión que en el mismo había introducido el Decreto-Ley de medidas económicas de 8 de octubre de 1976, completado por una Orden Ministerial de octubre de ese mismo año.

Vamos a ir analizando, cada uno de los aspectos sustantivos y procesales que regula este Real Decreto-Ley cuya importancia ya ha quedado señalada, con expresa mención de la pregunta de la Unidad Didáctica que ha resultado modificada con la publicación de la norma legal que comentamos.

A) **HUELGA.** La normativa anteriormente vigente en una parcela tan esencial en las relaciones de trabajo como es el Derecho a la huelga, estaba constituida por otro Decreto-Ley, el de 22 de mayo de 1975, en el que se regulaba toda la materia de conflictos colectivos de trabajo, una de cuyas últimas fases era, precisamente, la huelga.

Si bien este Decreto-Ley tuvo una trascendencia muy significativa en el ámbito del ordenamiento jurídico-laboral, por cuanto que consagró la legitimidad del Derecho a la huelga como forma de presión de los trabajadores frente al empresario para conseguir una mejora en sus condiciones de trabajo, no es menos cierto que este derecho, derecho que está reconocido de modo absoluto por la mayoría de las legislaciones del mundo llamado Occidental, estaba sometido, digo, en su virtualidad práctica, al cumplimiento de una serie de requisitos formales y de fondo que lo hacían, insisto, prácticamente inoperante. Así, las huelgas ni podían exceder el ám-

bito de la empresa, ni afectar a empresas encargadas de servicios públicos; a la vez se exigía la previa conciliación sindical y ante la autoridad laboral como trámite indispensable para poder considerar a una huelga como legal.

Sin embargo, el cambio de las estructuras socio-políticas en nuestro país, ha hecho indispensable que se intentara, como tarea urgente que no admite dilaciones, acomodar la legislación laboral a la nueva realidad existente, y cuya movilidad vertiginosa hace quedar desfasadas las sucesivas normas jurídicas que en materia laboral se van produciendo.

En el actual Decreto-Ley, se reconoce taxativamente el Derecho a la huelga como uno de los derechos que integran el conjunto de facultades que el Derecho laboral otorga a los trabajadores, y cuya renuncia en contrario de trabajo individual, es nulo de pleno derecho por infringir el artículo 35 de la vigente LCT, que es el que determina con carácter general, el principio de irrenunciabilidad de derechos a favor del trabajador.

La huelga, para que surta efectos jurídicos, debe ser declarada en cada centro de trabajo, bien por los representantes de los trabajadores, exigiéndose el *quorum* del 75 por 100 de ellos, o directamente por los mismos trabajadores estableciéndose un procedimiento especial para asegurar el secreto y el libre ejercicio del voto por parte de los interesados. El único requisito formal que exige el actual Decreto-Ley, es que dicho acuerdo sea comunicado al empresario y a la autoridad laboral en el plazo de cinco días, o en el de diez, si se trata de empresas encargadas de cualquier clase de servicio público, a la vez que comunicar cuál va a ser la composición del Comité de huelga, órgano éste de nueva creación, y que está encargado de la gestión de cuantas actuaciones administrativas y judiciales deban realizarse para la solución del conflicto planteado. Forman parte de él trabajadores del propio centro de trabajo en número que no exceda de doce.

Junto a este Comité, la novedad más señalada que introduce esta norma es la de admitir la huelga en aquellas empresas encargadas de la gestión de un servicio público, situación ésta prohibida en la normativa anterior, lo que ha llevado a la modificación del artículo 222 del Código Penal que tipifica los supuestos de sedición, limitándolos a los supuestos de funcionarios ya patronos y obreros que intentaran atacar la seguridad del Estado o su autoridad mediante la suspensión o alteración de las condiciones de trabajo.

Se mantiene el principio general, de que la participación en una huelga legal no extingue el vínculo laboral, sino meramente lo suspende; na ha lugar, en consecuencia, a la adopción de medidas sancionadoras, entre las que se incluye, evidentemente, el despido. Como contrapartida lógica a la suspensión unilateral de la relación contractual, el empresario no viene obligado a la contraprestación a que es deudor, esto es, a satisfacer los salarios devengados por los trabajadores. De otro lado, el empresario no puede realizar actos que tangen por objeto terminar con la huelga por procedimientos que no sean los de la simple negociación. Así, no podrá contratar obreros ajenos a la empresa para sustituir a los huelguistas (los denominados "esquirolés"), salvo que por parte de los mismos trabajadores se infrinja la obligación de ejercer aquellas actividades ineludibles para el futuro desempeño de la actividad empresarial.

Mientras esta situación de huelga se mantenga, los productores seguirán dados de alta en la Seguridad Social, mediante un alta especial en la misma, y a cubierto de todos los riesgos incluidos en la misma, si bien se suspende la obligación de cotización por ambas partes. Sin embargo, como excepción, los trabajadores no tendrán derecho a la percepción de las prestaciones debidas por desempleo o incapacidad laboral transitoria.

En la norma que estamos analizando, se define lo que debe entenderse por huelga, en cuanto a modo de formalización de una situación conflictiva planteada en el seno de una empresa, y que consiste precisamente en la cesación de la prestación de servicios sin que se produzca ocupación de los centros de trabajo o de cualquiera de sus dependencias. En consecuencia, y como señala el propio Decreto-Ley *ad exemplum*, las huelgas rotatorias las realizadas en sectores estratégicos, las de celo, etc., se consideran actos ilícitos o abusivos. Sin embargo, la norma legal no establece qué tipo de sanción cabe imponer a estas conductas, aunque por el contexto y espíritu de la norma cabe suponer que el empresario podrá hacer uso de su facultad sancionadora de despido, al amparo del (art. 33, apartado j) tan citado Decreto-Ley, que es el que establece las causas taxativas de despido, en sustitución del artículo 77 de la LCT, que ha quedado derogado.

Como complemento de esta regulación de la huelga, se señalan taxativamente los supuestos de huelga ilegal en el artículo 11, lo que a *sensu contrario* significa que las demás actividades de huelga se considerarán legales a los efectos prevenidos en el Decreto-Ley. Precisamente, y debido a la potenciación que se quiere atribuir a los Convenios Colectivos como instrumento de "paz social", digo, es causa de ilicitud de la huelga la realizada con el fin de alterar las condiciones de trabajo establecidas en un Convenio vigente, aunque si se admite la huelga como instrumento de presión en la negociación del mismo.

Son los Convenios colectivos, entendidos como norma de aplicación prioritaria a las relaciones de trabajo individuales, los que pueden establecer normas complementarias relacionadas con los procedimientos de solución de los conflictos que den origen a la huelga, así como la renuncia durante su vigencia, al ejercicio de tal derecho. El Gobierno, en todo caso, se reserva la facultad de obligar a la reanudación de la actividad laboral por un período máximo de dos meses, o de modo definitivo mediante el establecimiento de un arbitraje obligatorio.

En contrapartida a la huelga, la fórmula técnica y legal de formalización del conflicto planteado, por parte de los empresarios es el de cierre patronal o "lock-out" en terminología anglosajona.

No vamos a entrar aquí en la diferencia doctrinal entre cierre "propio" e "impropio". Nuestra legislación anterior, reconocía como válido, el cierre que se producía como consecuencia de una previa huelga de los productores, y en virtud de ella se procedía al cierre de las instalaciones. Es esta misma actividad, la que el Decreto-Ley reconoce como lícita ("cierre de respuesta"), siempre que se den las circunstancias señaladas en el artículo 12. La novedad, con carácter esencial, que se introduce en nuestro ordenamiento jurídico, es el suprimir la autorización administrativa para proceder al cierre del centro de trabajo con lo que a *sensu contrario*, se atribuye el conocimiento de la legalidad e ilegalidad de esta situación a las Magistraturas de Trabajo.

Solamente se obliga al empresario a comunicar esa actitud a la Autoridad Laboral en el término de doce horas, viniendo obligado a la reapertura del mismo cuando la propia autoridad laboral o los empleados, así lo soliciten. La contravención de esta obligación, se sanciona con las multas prevenidas en el artículo 33, Ley de Relaciones Laborales. Por todo lo anteriormente expuesto, el alumno debe tener en cuenta estas modificaciones, a la hora de estudiar la Unidad Didáctica núm. 4, concretamente en su apartado c), al hablar de la formalización con cesación del trabajo debe ser sustituido por el texto precedente.

B) **CONFLICTOS COLECTIVOS.** En la regulación que de esta situación hacía el anterior Decreto-Ley de 22 de mayo de 1975, hoy derogado en su totalidad por la nueva norma

que comentamos, se consideraba al conflicto colectivo como fase previa a la huelga con la obligación de las partes de someterse, en el intento de solucionar su conflicto, a la conciliación, obligatoria, sindical y de la Autoridad Laboral. Si las partes no llegaban a ninguna solución, o bien podían acudir a la vía de la huelga, o se sometían al arbitraje voluntario de la Autoridad Laboral ("laudo de obligado cumplimiento"). En la nueva regulación, el conflicto es la segunda vía, menos lesiva y perjudicial para las partes, a la que pueden acudir las partes para solucionar la desavenencia entre ellas surgida.

Como principio general, se reconoce la facultad de los trabajadores de, una vez declarada la huelga en los términos antes mencionados, utilizar esta otra vía, pero no a la inversa, ya que de hacerlo así, incurrirían en huelga ilegal con sanciones que ello acarrea.

La iniciación del conflicto colectivo queda reservada a los representantes de los trabajadores, o a los propios empresarios, aunque en este segundo supuesto si los trabajadores, en uso del derecho que les corresponde, proceden a declarar la huelga, se archivarán dichas actuaciones. Tampoco, y en esto se equipara el conflicto a la huelga, podrá plantearse un conflicto colectivo para modificar lo pactado, en convenio o lo establecido por laudo de la autoridad laboral. El procedimiento de formalización es simple, pues basta con escrito firmado y fechado que es remitido a la Delegación o a la Dirección General de Trabajo, según afecte a una o varias provincias, las cuales intentan la avenencia ante sí. Si se llega a un acuerdo el mismo alcanza una eficacia similar a lo pactado en Convenio Colectivo. Si en esta avenencia no se llega a ninguna conclusión, las partes pueden, bien someterse a la Autoridad Laboral, la cual, si se trata de discrepancias en cuanto a la interpretación de una norma preexistente, remitirá las actuaciones a la Magistratura de Trabajo, y si se trata de introducir modificaciones en las condiciones de trabajo, dictará directamente, laudo de obligado cumplimiento en el término de cinco días. Sirve, con carácter general, para este epigrafe, lo dicho anteriormente respecto a la huelga, en lo relativo a la modificación que el Decreto-Ley introduce en la Unidad Didáctica núm. 4.

C) **CONVENIOS COLECTIVOS.** Como señalamos anteriormente la filosofía que inspira este Decreto-Ley es la de considerar al mismo como auténtico instrumento de paz social. De ahí, que se hayan introducido sustanciales modificaciones en la vigente Ley de Convenios Colectivos de 19 de diciembre de 1973, en un intento de potenciar esta institución en detrimento de otra figura típicamente laboral, como es la Reglamentación u Ordenanza de Trabajo, que quedan ahora limitadas a regular aquellos sectores de la actividad laboral en los que no exista Convenio Colectivo, institución esta que se convierte así, en *lex* suprema que regulará las relaciones de trabajo, en su más amplio sentido.

Se ha dado nueva redacción al artículo 5 de la Ley de Convenios Colectivos, regulador de las unidades de contratación que en calidad de tal, participaban en las negociaciones del Convenio. Ahora estas unidades son tres:

a) *Una sola empresa.* Cualquiera que sea el número de trabajadores que ocupe, sea en una provincia o en varias, o un solo *centro de trabajo*, cuando sus propias características lo hicieran necesario.

b) *Un grupo de empresas,* definidas por sus especiales características, en el ámbito nacional, interprovincial, comarcal o local. Queda suprimida así, la unidad de ámbito provincial que reconocía la Ley de Convenios Colectivos.

c) *La totalidad* de las empresas regidas por una Reglamentación u Ordenanza en los ámbitos del supuesto anterior. Este artículo 5 modifica el apartado B) del Tema XXI correspondiente a la Unidad Didáctica núm. 4.

En consonancia con la facultad que se reconoce a los trabajadores de ejercer su derecho a la huelga o al conflicto colectivo como medio de presión en la negociación de las condiciones de trabajo, el Decreto-Ley prohíbe tajantemente que durante la vigencia de un convenio, que como señala la disposición adicional 3.^a, número 2, será de *un año*, y hasta tres meses antes de la terminación de la misma pueda negociarse otro convenio que sustituya al anterior. Una vez aprobado un Convenio, éste se entenderá prorrogado de año en año, si no se denuncia por cualquiera de las partes en el plazo señalado en el artículo 11 de la Ley de Convenios Colectivos (tres meses).

Se ha suprimido la intervención de la autoridad laboral en la elaboración del mismo, con su facultad de dictar “decisiones arbitrales obligatorias” en aquellos supuestos de imposibilidad de acuerdo por las partes, a la vez que se ofrecen tres tipos de posibles soluciones en caso de desacuerdo: el arbitraje voluntario solicitado por las partes, el conflicto colectivo y la huelga. Con ello, queda derogado el apartado e) del epígrafe E) relativo al procedimiento de elaboración del Convenio Colectivo de la misma Unidad, así como el epígrafe D) correspondiente al Tema XXII de la misma Unidad Didáctica. Se mantiene, sin embargo, la obligatoriedad por las partes que intervienen en cada unidad de contratación de negociar de buena fe y con la intención de llegar a una solución. El incumplimiento de esta obligación legal, se sanciona de modo diferente, por la Autoridad Laboral, según que la infracción de la misma provenga del empresario o de los trabajadores. Con respecto a éstos, la novedad radical que se introduce, según lo dispuesto en la disposición adicional 3.^a; número 1, es que sin perjuicio de lo establecido en la vigente Ley de Convenios Colectivos, en las Comisiones deliberadoras que se instituyen para la negociación y conclusión del Convenio, se admite la presencia de representaciones específicas de trabajadores y empresarios, al margen de los representantes legales de uno y otros. Esta peculiaridad deberá ser añadida al epígrafe C) que habla de las partes del Convenio Colectivo.

D) *DESPIDOS*. Como se reconoce en el preámbulo del Real Decreto-Ley, la necesidad de adecuar el conjunto de la normativa legal de nuestro país, y concretamente en el ámbito laboral por lo que aquí nos interesa, a los criterios que en esta materia ha señalado la OIT y con vistas a nuestra futura incorporación a los países del Mercado Común, es por lo que el citado Decreto-Ley ha introducido algunas modificaciones en la regulación de la materia sobre despidos y cuya trascendencia social y económica es inútil resaltar, lo que ha llevado a la supresión del artículo 77 de la Ley de Contrato de Trabajo, en el que se enumeraban las causas taxativas de despido disciplinario, y del artículo 10 del Real Decreto-Ley de 8 de octubre de 1976 en el que se regulaba transitoriamente (hasta septiembre de este año) toda la normativa legal sobre despidos, suspendiendo durante este período la vigencia del, controvertido y hoy suprimido totalmente, artículo 35 de la Ley de Relaciones Laborales. Así mismo, y como novedad sustancial respecto a la anterior normativa, se establece una nueva causa de despido, a añadir a la disciplinaria, que es la producida por circunstancias objetivas derivadas de la capacidad del trabajador o necesidades de funcionamiento de la empresa. En consecuencia, se entiende suprimido el apígrafe B) relativo a las causas del despido disciplinario, que establecía el Tema XVI de la 3.^a Unidad Didáctica, así como el epígrafe C) que ha quedado sin contenido.

Se mantiene, sin embargo, la calificación causal del despido, rechazándose expresamente la posibilidad del despido *ad nutum* o sin causa. Se siguen enumerando las causas taxativas de

despido, si bien ahora se adicionan otras nuevas, y se especifican taxativamente (art. 32) los hechos que en ningún caso podrán ser considerados como justas causas de despido.

Con respecto al despido disciplinario, que podemos considerar como el ordinario o genérico, se siguen manteniendo las causas de despido que enumeraban el artículo 77 de la Ley de Contrato de Trabajo, si bien se ha suprimido de la misma la ineptitud, que pasa ahora a formar parte del nuevo tipo de despido que se crea, a la vez que se adicionan dos nuevas: a) La participación activa en huelga ilegal o alteración colectiva del trabajo. Debemos entender por huelga ilegal, la realizada al margen de las prescripciones del actual Real Decreto-Ley. b) La negativa, durante la huelga, a la prestación de aquellos servicios que se consideran necesarios, para el funcionamiento de la empresa.

El procedimiento sancionador, se ha simplificado, suprimiendo los preceptos contenidos en la Ley de Procedimiento Laboral, en lo relativo a la necesaria instrucción de expediente para poder hacer uso de la facultad rescisoria del contrato. Ahora, basta con la simple comunicación escrita al trabajador haciendo constar los hechos que lo motivan y la fecha del mismo, salvo que el trabajador ostente cargo sindical, en cuyo caso, y previamente a la comunicación al interesado, deberá ponerse en conocimiento de los representantes de los trabajadores. Con ello, el epígrafe E) queda suprimido en su totalidad, debiendo ser sustituido por el comentario que se hace, así como por la lectura inexcusable del texto del Decreto-Ley.

Se faculta al trabajador, para que sin el previo trámite de la conciliación sindical, pueda reclamar directamente ante Magistratura en el término de quince días prorrogables por otros tres. Si el Magistrado apreciara que no existe justa causa de despido, condenará a la readmisión del trabajador, y si esta no se produce, vendrá el empresario obligado a satisfacer una indemnización cuya cuantía no podrá ser inferior a dos meses de salario por año de servicio, sin que en ningún caso pueda exceder de cinco anualidades. Sin embargo, en aquellas empresas que empleen menos de 25 trabajadores fijos, el Magistrado podrá rebajar el tope mínimo anterior.

Si el trabajador despedido ostentara cargo electivo sindical, la readmisión deviene obligatoria para el empresario.

Con respecto al nuevo tipo de despido que se crea, es decir, el derivado de circunstancias objetivas o de funcionamiento de la empresa, se predica de él su carácter causal, como el anterior. Las causas de despido son:

- a) La ineptitud del trabajador, originaria o sobrevenida.
- b) La falta de adaptación a las modificaciones tecnológicas que se introduzcan.
- c) La necesidad de amortizar individualmente un puesto de trabajo.
- d) Las faltas de asistencia al trabajo, aunque sean justificadas, que superen el 30 por 100 de la jornada en un año, y no sean debidas a accidentes o enfermedad que produzcan incapacidad continuada de larga duración.

El procedimiento es más formalizado en esta modalidad del despido, pues se exige, para que tal medida surta los efectos pertinentes:

1. Comunicación escrita del despido al trabajador, con expresión de la fecha y causa que lo motiva.

2. Poner a su disposición, simultáneamente con lo anterior, la indemnización correspondiente a los supuestos de despido procedente; esto es, una semana de salario por año de servicio o fracción de año.

3. Concesión de un plazo de preaviso, de uno, dos o tres meses, según sea la antigüedad del trabajador en la empresa si bien, el mismo Decreto-Ley hace la salvedad de que la no concesión de este preaviso, no anula el despido aunque sí obliga al empresario a abonar los salarios correspondientes a dicho periodo.

Se reconocen las garantías que para los cargos electivos de carácter sindical establece esta norma y las demás normas que son de aplicación a estos trabajadores, así como el derecho irrenunciable del trabajador a acudir ante Magistratura, alegando la improcedencia o nulidad del despido realizado. De otro lado, y en atención a la peculiaridad que esta modalidad de despido conlleva, se reconoce al productor, durante los periodos de preaviso, el derecho a licencias de hasta seis horas semanales, que dedicará a buscar un nuevo empleo.

Una vez que las partes acuden ante Magistratura, en demanda de solución del conflicto individual entre ellas planteado, si el Magistrado declara improcedente el despido, condenará al empresario a la readmisión, y en su defecto a la indemnización que se establece para el despido disciplinario. Por supuesto, en caso de readmisión, el productor viene obligado a la devolución de la indemnización que le fue ofrecida por el empresario al comunicarle el despido, y si esta readmisión no se lleva a cabo, de la indemnización total que fije el Magistrado será deducible esta otra. El procedimiento, que en las demandas por despido, que establece el Decreto-Ley deroga al contenido en la LPL, suprimiéndose, entre otras modificaciones, la opción que en favor de empresario y trabajador, según el número de productores de la empresa, establecía la LPL al declarar improcedente el despido.

E) *REESTRUCTURACION DE PLANTILLAS.* Como consecuencia lógica y primaria del derecho o facultad que el ordenamiento jurídico reconoce a los trabajadores de acudir a la huelga o al conflicto colectivo, como medio de solución de las reivindicaciones planteadas así como de la potenciación de la negociación colectiva de las condiciones de trabajo, se establece un nuevo procedimiento, prelación y cuantía de las indemnizaciones en materia de reestructuración de plantillas por causas económicas y tecnológicas.

El espíritu del Decreto-Ley, es el de agilizar al máximo el preceptivo expediente administrativo, así como el posibilitar que en la negociación colectiva se puedan establecer procedimientos que simplifiquen el régimen legal establecido.

En consecuencia, la suspensión o extinción de las relaciones de trabajo fundada en causas tecnológicas, se venía rigiendo por el artículo 18 de la Ley de Relaciones Laborales que exigía la previa autorización del Ministerio de Trabajo mediante expediente que informaba la Organización Sindical y el Jurado de Empresa o enlaces sindicales de la empresa. Ahora, será preceptivo únicamente el informe de la representación de los trabajadores en el seno de la empresa, a la vez que se autoriza que sean los Convenios Colectivos, los que establezcan cuantías indemnizatorias, plazos de preaviso, etc. Así mismo, esta suspensión del vínculo laboral puede llevarse a efecto en virtud de pacto entre trabajador y empresario, que deberá ser comunicada a la Autoridad Laboral que podrá aceptarlo o exigir que continúe el procedimiento ya iniciado.

En todo caso, en el momento de solicitud, la empresa formulará propuesta de indemnización, en cuyo caso la Autoridad Laboral lo admitirá siempre que las mismas superen las máxi-

mas que establece la Ley de Procedimiento Laboral. Si no se fijan indemnizaciones, será la Magistratura de Trabajo quien las fijará.

El Decreto-Ley establece, finalmente, que en aquellos supuestos de insolvencia, suspensión de pagos o quiebra, el Fondo de Garantía Salarial anticipará a los trabajadores afectados, las indemnizaciones establecidas, hasta el máximo reconocido en la Ley de Procedimiento Laboral ya aludida (un año de de salario; art. 116 de la Ley de Procedimiento Laboral). Las normas que en materia de reestructuración de plantillas establece el Real Decreto-Ley que se comenta, introducen modificaciones parciales en la normativa reguladora de los expedientes de crisis; es decir, en el D.P.E. de 2 de noviembre de 1972, completado por Orden Ministerial de 18 de diciembre del mismo año. A su vez, esta norma había sido completada con el aludido artículo 18 de la Ley de Relaciones Laborales, tal como señala el profesor Alonso Olea en su libro recomendado. Es este artículo 18, el que queda modificado parcialmente por el Decreto-Ley, debiéndose entender modificado el epígrafe F) del Tema XV de la Unidad Didáctica 3, tal y como ha sido desarrollado en este comentario.

Una de las modificaciones legislativas que en el ámbito laboral se han producido junto con la publicación del Real Decreto de 4 de marzo de 1977 es el Real Decreto de 4 marzo de 1977 (B.O.E. 8 de marzo). Este Real Decreto regula el Fondo de Garantía Salarial, que en carácter genérico fue instituido en el artículo 31 de la Ley de Relaciones Laborales. Este Fondo, tiene como misión general el garantizar y anticipar a los trabajadores por cuenta ajena, el percibo de los salarios que se les adeuden, con el *límite de tres meses* como máximo, así como las cotizaciones a la Seguridad Social por igual período.

La constitución del Fondo se hace por una sola vez, lo que obliga a la reposición periódica de las cantidades entregadas a los trabajadores o a las Entidades Gestoras, en la cuantía que anualmente señale el Ministerio de Trabajo.

La cuantía inicial será la correspondiente *al 0,2 por 100* de los salarios de cotización a la Seguridad Social, cantidad ésta que se ingresará conjuntamente con las cuotas de la Seguridad Social en los doce meses siguientes al de publicación del citado Real Decreto en el "B.O.E." (art. 2 del Real Decreto).

La cuantía máxima del Fondo, según lo establecido en el artículo 31 de la Ley de Relaciones Laborales, será el 1,5 por 1.000 del volumen anual de la remuneración de los asalariados, cubriéndose esta cuantía en el porcentaje antes señalado sin que exceda del 0,3 por 100.

Este Decreto, sin embargo, no es de aplicación a aquellas empresas que por su naturaleza no puedan quedar sometidas a procedimientos que puedan dar lugar a declaraciones de insolvencia, suspensión o quiebra.

Este Real Decreto ha sido desarrollado por la Orden Ministerial de 28 de marzo de este año ("B.O.E." del 29 de marzo). Las precisiones de la Orden Ministerial podemos sintetizarlas en los siguientes puntos:

1. Los salarios de cotización a los que se refiere el artículo 2 del Decreto citado, serán los utilizados como base de cotización para las contingencias de accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y desempleo, es decir, que las bases de cotización serán las que correspondan a la totalidad de las remuneraciones que en concepto salarial perciba el trabajador (salarios reales).

2. El ingreso al que viene obligada la Empresa, cuya cuantía es la del 0,2 por 100 se efectuará conforme a las normas de recaudación e ingreso de cuotas a la Seguridad Social, especificando dicha Orden que el ingreso de estas cuotas a partir de la entrada en vigor del Decreto, esto es el 1 de abril, se efectuará en el mes de mayo del corriente año. Queda así pues delimitado temporalmente el plazo de un año que para los ingresos de estas cuotas establecía el citado Decreto.

3. Asimismo, en los casos de reestructuración de plantilla por causas tecnológicas y económicas (cuyo procedimiento va regulado con detalle en el Real Decreto-Ley sobre relaciones de trabajo), es el Fondo de Garantía Salarial el que anticipará a los trabajadores afectados las indemnizaciones pertinentes hasta el máximo previsto en la Ley de Procedimiento Laboral, siempre que la Resolución de la Autoridad Laboral que autorice dicho expediente, sea dictada a partir del 1 de abril de este año.

Leodegario Fernández Marcos
Juan C. Domínguez Bautista

DERECHO MERCANTIL II

LAS OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO

(Las "Explicaciones complementarias" de *Derecho mercantil II*, Unidad Didáctica núm. 1, Tema VI, núms. 7, 8 y 9, se sustituyen por las que a continuación se desarrollan conforme al programa que se indica.)

Programa: 7. Consideraciones generales: *a)* Tipicidad del *leasing*; *b)* Noción y estructura de la operación; *c)* Función económica de la O.A.F. 8. El titular de la empresa de arrendamiento financiero: *a)* Requisitos de constitución; *b)* Normas de funcionamiento. 9. Contratos de arrendamiento financiero: *a)* Concepto, caracteres y naturaleza jurídica; *b)* Contenido del contrato, obligaciones de las partes; *c)* Extinción del contrato.

7. Consideraciones generales

a) Tipicidad legal del "leasing". Entre las técnicas contractuales importadas de países anglosajones, el *leasing* es una de las que ha llegado a adquirir mayor difusión en nuestro tráfico mercantil. Hasta fecha muy reciente, el *leasing*, tanto en su aspecto contractual como en su aspecto institucional, carecía en nuestro Derecho positivo de regulación específica (1). Esta situación de atipicidad legal, paliada en sus efectos por los autores españoles que elaboraron soluciones de gran interés teórico y práctico para las complejas cuestiones jurídicas que el *leasing* venía suscitando en la práctica mercantil nacional (2), se ha modificado notablemente como consecuencia de la promulgación del Real Decreto-Ley núm 15, de 25 de febrero de 1977, sobre medidas fiscales, financieras y de inversión pública, en cuyo Título Segundo, que trata "De las empresas de arrendamiento financiero", se establecen las normas configuradoras del régimen jurídico institucional y contractual de este sector del tráfico mercantil (3). Estas normas, complementadas por las disposiciones contenidas en la Orden Ministerial de 16 de marzo de

(1) Véase U.D. I, Tema VI, párrafo primero de pág. 96.

(2) Si el alumno desea ampliar el estudio de estas operaciones mercantiles, puede consultar la siguiente bibliografía: BERMUDEZ, *Nuevas fórmulas de financiación*, Madrid, 1972; CUESTA RUTE, *Reflexiones en torno al leasing*, R.D.M., 1970, págs. 533 y ss.; ILLESCAS ORTIZ, *El leasing, aproximación a los problemas planteados por un nuevo contrato*, R.D.M., 1970, págs. 73 y ss.; MARTIN OVIEDO, *El leasing en el Derecho español*, Madrid, 1972; RICO PEREZ, *Uso y disfrute de bienes ajenos con opción a compra. La contratación por leasing en España*, Madrid, 1974; SAGRERA-MARTORELL, *Hacia un mayor conocimiento del contrato de leasing*, R.J.C., 1972, págs. 561 y ss.

(3) El texto de este Decreto-Ley se transcribe en la sección "Crónica legislativa" de nuestro Boletín, a la que remitimos.

1977, constituyen un ejemplo más de la influencia de las leyes económicas y fiscales sobre el Derecho mercantil sustantivo o material (4), no sólo porque en este caso el legislador español incorpora al sistema jurídico positivo nuevas figuras, antes atípicas, de empresario y de empresa, sino además porque, de un lado, predispone una *status* especial para ellas, de otro, adopta decididamente para las mismas el *nomen iuris* de “arrendamiento financiero” que un sector de la doctrina patria proponía para sustituir a la expresión inglesa (5), y, de otro, introduce en el contenido de los contratos de arrendamiento financiero normas de carácter imperativo que rectifican o subrayan los rasgos de la fisonomía puramente doctrinal que hasta la fecha, a falta de una tipicidad legal expresamente establecida, ofrecía entre nosotros el negocio de *leasing* (6).

b) *Noción y estructura de la operación.* La operación de arrendamiento financiero (en lo sucesivo O.A.F.) consiste fundamentalmente en la financiación de un bien de equipo por cuya utilización, afecta exclusivamente a los fines de la explotación empresarial, un empresario paga una cantidad periódica de dinero a otro empresario que por encargo del primero adquirió dicho bien a un tercero (7).

Desde un punto de vista estructural, en la operación que sucintamente se ha descrito distinguiremos los siguientes elementos: 1.º *Subjetivo*, integrado por las tres personas que intervienen en la operación, y que son el *usuario* (empresario que para la explotación de su negocio necesita un determinado bien productivo y que, por no tener o no querer invertir el capital preciso para adquirirlo en propiedad, decide adquirir simplemente el derecho a usarlo a cambio de una renta), el *arrendador* (empresario que adquiere a un tercero el bien solicitado específicamente por el usuario para, a su vez, cederlo a éste en arrendamiento por tiempo, precio y demás condiciones de uso determinados), el *tercero* (empresario fabricante o suministrador de los bienes adquiridos por el arrendador a petición del usuario); 2.º *Objetivo*, que está constituido, de una parte, por los “bienes de equipo, capital productivo o vehículos” adquiridos por el arrendador a los fines exclusivos de su posterior arrendamiento al usuario, y que por éste “han de quedar afectados exclusivamente a fines agrarios, industriales, comerciales, de servicios o profesionales”, y, de otra parte, por las cantidades periódicamente pagadas por el usuario al arrendador como contraprestación por el uso de los bienes arrendados (8); 3.º *Jurídico-instrumental*, integrado por las relaciones derivadas, respectivamente, del *encargo o pedido* que hace el usuario al arrendador para que compre al tercero el bien objeto del posterior arrendamiento, de la *adquisición* del aludido bien mediante compra-venta concluida entre el arrendador y el fabricante, y, por último, del *arrendamiento* propiamente dicho de los bienes adquiridos con ese fin (9).

c) *Función económica de la O.A.F.* En la práctica mercantil, el arrendamiento financiero cumple una función de indudable interés para la mayor parte de los empresarios que desarrollan su actividad económica en los distintos sectores productivos (10). En efecto, de un lado, la

(4) Para un planteamiento general del tema, ciertamente sugestivo, de las relaciones entre ambas disciplinas, recomendamos la lectura del epígrafe 7 de la Unidad Didáctica núm. 1 de *Derecho mercantil I*, pág. 30.

(5) Véase MARTIN OVIEDO, ob. cit., págs. 32 y 33.

(6) El artículo 20, núm. 3 del Real Decreto-Ley de 25-2-1977, dispone, que “el plazo y demás condiciones en las que se han de concertar estas operaciones se determinarán reglamentariamente”.

(7) Esta noción se encuentra implícitamente formulada en el artículo 19, en relación con el 20 núm. 1, del Real Decreto-Ley citado en nota anterior.

(8) Artículo 20, núm. 1, del Real Decreto-Ley citado.

(9) Sobre la conexión de las tres relaciones subrayadas trataremos más ampliamente al estudiar la naturaleza jurídica de la O.A.F. Reflexione, sin embargo, el alumno ahora sobre los sujetos de dichas relaciones y cómo éstas integran una operación unitaria.

(10) Respecto de la clasificación de las O.A.F. véase Unidad Didáctica núm. 1, *Derecho mercantil II*, último párrafo de pág. 95, donde se limita el alcance y sentido de la función económica del *leasing* según la modalidad en que el arrendamiento financiero se concrete.

O.A.F. es un "instrumento financiero complementario" (11), en el sentido de que la disponibilidad para fines exclusivamente empresariales de un bien productivo puede obtenerse en condiciones de financiación que, en principio, ofrecen ciertas ventajas en relación con las operaciones de compra-venta a crédito, sea éste concedido por el vendedor o por una entidad financiera (12); de otro lado, la O.A.F. es un "instrumento jurídico de colaboración interempresarial" (13), en el sentido de que uno de los sujetos del negocio de arrendamiento financiero coopera con su actividad profesional al mejor desarrollo de la actividad empresarial del otro sujeto de la relación arrendaticia (14); y, de otro lado, la O.A.F. es un "instrumento de gestión y explotación de la empresa y de reactivación económica general" (15), en la medida en que, respectivamente, libera de cargas de tesorería al usuario, incrementa su capacidad de inversión, optimiza la relación coste/tiempo de vida útil del bien, disminuye los riesgos y costes consiguientes a la obsolescencia del mismo, y, además, estimula la actividad productiva en general al incrementar-se la demanda de bienes de equipo por este medio (16).

8. El titular de la empresa de arrendamiento financiero

A partir de la promulgación del Real Decreto-Ley de 25 de febrero de 1977, complementada por las normas contenidas en la Orden ministerial de 16 de marzo del mismo año, las O.A.F. han sido reguladas, desde una perspectiva institucional, de manera que ha quedado sustancialmente alterado el anterior régimen de libertad de constitución y funcionamiento de las empresas dedicadas a la realización de esta clase de operaciones. Puede decirse, por tanto, que la nueva normativa vigente predispone un *estatuto* para los empresarios cuya actividad económica profesional consista en concluir operaciones cuyo objeto sea el arrendamiento financiero de bienes productivos (17). Veamos cuáles son las líneas esenciales del indicado estatuto.

a) *Requisitos de constitución.* Las empresas que tengan por objeto la realización habitual de operaciones de arrendamiento financiero habrán de revestir la forma de sociedad anónima con domicilio en territorio nacional. Estas sociedades anónimas son especiales (18), 1.º porque su objeto se ha de circunscribir exclusivamente al ejercicio de O.A.F.; 2.º porque han de contar con un capital mínimo de cien millones de pesetas, íntegramente desembolsado y sin que sean permitidas las aportaciones no dinerarias (19); 3.º porque la sociedad ha de figurar inscrita en el "Registro de Empresas de Arrendamiento Financiero" establecido en el Ministerio

(11) Recomendamos la lectura del Preámbulo del Real Decreto-Ley citado; véase allí párrafo tercero.

(12) Conviene que el alumno, antes de seguir adelante en el estudio de este tema, repase el concepto y régimen de la "Compraventa a plazos" (véase Unidad Didáctica núm. 1, Instrucciones en pág. 51, epígrafe 4) para diferenciar con seguridad ambas operaciones.

(13) Véase L.r. 10.ª edición, pág. 471.

(14) Teniendo presentes el concepto de contrato de colaboración y la noción y estructura del arrendamiento financiero, reflexione el alumno sobre la adecuación y posibles consecuencias de que la "colaboración interempresarial" sea un principio esencial en la disciplina del negocio jurídico mediante el cual se instrumenta la O.A.F.

(15) Véase párrafo cuarto del Preámbulo del Real Decreto-Ley citado.

(16) Véase *supra* nota 11, así como Unidad Didáctica núm. 1, *Derecho mercantil II*, págs. 94, último párrafo, y 95, párrafo primero.

(17) El tema de las "Sociedades anónimas especiales" puede estudiarse en L.r. núms. 382 a 391; entre ellas cabría incluir las empresas de arrendamiento financiero.

(18) Véase el artículo 22 del Real Decreto-Ley citado, y compárese el régimen de constitución allí establecido para estas empresas con el de las "Sociedades de financiación de ventas a plazos" instituidas por el Decreto-Ley de 27 de diciembre de 1962 (véase L.r. núm. 387).

(19) Repase el alumno los epígrafes 5 y 6 de la Unidad Didáctica núm. 3 de *Derecho mercantil I*, correspondiente al L.r. núms. 210 y 211.

de Hacienda y llevado por la Dirección General de Política Financiera, de manera que "ninguna Empresa podrá ejercer O.A.F. sin figurar previamente inscrita en este Registro" (20).

b) *Normas de funcionamiento.* Sin perjuicio de las disposiciones de carácter fiscal (exenciones y bonificaciones tributarias diversas), de las reglas generales de la Ley de Sociedades Anónimas de 1951 en lo que no hayan sido modificadas por la especial disciplina de esta clase de empresas (límite de capital mínimo, desembolso total, prohibición de aportaciones no dinerarias, objeto social predeterminado y exclusivo, inscripción en Registro administrativo), y de las normas sobre amortización de inversiones, el Real Decreto-Ley dispone que, en lo sucesivo, las sociedades de arrendamiento financiero deberán adaptar su sistema contable a las normas establecidas en la Orden Ministerial de 3-6-1976 por la que se instauró el Plan General de Contabilidad para dichas sociedades (21).

9. Contratos de Arrendamiento Financiero

a) *Concepto, caracteres y naturaleza jurídica.* Se concibe jurídicamente la O.A.F. como contrato por virtud del cual una sociedad anónima de arrendamiento financiero, según las especificaciones señaladas por el futuro usuario, adquiere a un tercero un bien productivo para ceder su uso a un empresario que, a cambio de la disponibilidad del bien y con opción de compra ejercitable al término del negocio, se obliga a pagar a aquella sociedad una cantidad periódica de dinero.

Se trata de un contrato *mercantil*, tanto por la condición de empresarios de los sujetos que intervienen en la O.A.F. como por el objeto de la misma; *consensual*, porque se perfecciona por el mero consentimiento de las partes del negocio; *bilateral*, porque genera obligaciones para el arrendador y para el usuario; *duradero*, porque el cumplimiento de algunas de las obligaciones generadas implica una conducta permanente del obligado; *de ejecución periódica*, porque el cumplimiento de las obligaciones del usuario supone realizar actos reiterados durante el tiempo de vigencia del contrato; *de adhesión*, porque las cláusulas del negocio son preestablecidas unilateralmente por la sociedad en formulario uniforme que contiene las "condiciones generales del contrato" (22) cuyo contenido no puede discutir el usuario, limitándose éste a aceptarlas pura y simplemente. El contrato relativo a una O.A.F. normalmente se formaliza por escrito según formulario *standard* que firman arrendatario y usuario, con la intervención, en ocasiones, de fedatario mercantil. La posibilidad de que en la práctica se produzcan situaciones de abuso de posición contractual dominante, ha inducido a un sector de nuestra doctrina a reclamar una disciplina apropiada, cuya promulgación por vía reglamentaria se anuncia en el Real Decreto-Ley (23), y el correlativo sistema de publicidad de esta clase de operaciones mercantiles, que tutele los legítimos intereses de las sociedades de arrendamiento financiero (24).

(20) Sobre los trámites de la inscripción en el Registro especial, véase Orden ministerial de 16 de marzo de 1977 ("B.O.E." de 25 3-77), especialmente los artículos 3 y 5.

(21) Véase artículo 25, núms. 2 y 3 del Real Decreto-Ley de 25 de febrero de 1977 ("B.O.E." de 28-2-77).

(22) Se recomienda la atenta lectura del formulario de O.A.F. que se transcribe al final de esta explicación.

(23) Véase *supra* nota 6; en el sentido del texto. SANCHEZ CALERO, *Instituciones de Derecho mercantil*, 6.^a edición, Valladolid, 1977, págs. 393-394.

(24) Véase Condición General Séptima del formulario *infra* transcrito, en lo que se refiere al registro del material objeto de arrendamiento, que no debe confundirse con el Registro de las Empresas de Arrendamiento Financiero a que se refiere la Orden ministerial citada *supra* nota 20.

La calificación jurídica de las O.A.F. constituye indudablemente uno de los más complejos problemas que la doctrina tiene planteados en relación con esta institución mercantil. En efecto, la intervención de tres sujetos en la operación (arrendador, usuario y tercero), la coordinación funcional de relaciones jurídicas para la consecución de un resultado económico unitario (comisión, compraventa, arrendamiento, seguro y opción), la pluralidad y heterogeneidad de causas de las distintas obligaciones que se establecen (cesión de uso y disfrute, concesión de crédito o financiación, cobertura de riesgos, etc.), son circunstancias que dificultan extraordinariamente cualquier intento de reconducir la O.A.F. al esquema jurídico de los contratos clásicos (25). Por todo ello y ante la próxima regulación pormenorizada de las “condiciones en las que se han de concertar estas operaciones” (26), cuya reglamentación ayudará sin duda a formular conclusiones más exactas y ajustadas a la tipicidad legal definitiva de las O.A.F., parece preferible calificarlas hoy como modalidad *sui generis* de arrendamiento o, si se prefiere más concretamente, como contrato de naturaleza jurídica especial en cuya estructura negocial coexisten y funcionalmente se complementan las causas típicas de la *locatio conductio rerum* y de los negocios de crédito y comisión (27).

b) Contenido del contrato. Para analizar el contenido contractual de las O.A.F. vamos a considerar separadamente dos períodos de la operación en los que los sujetos de la misma desarrollan alguna clase de actividad dirigida a la realización de los objetivos característicos del arrendamiento financiero de bienes de equipo.

En el sentido indicado, distingue la doctrina una primera fase o período constituido por las relaciones previas entre usuario y tercero, anterior a la conclusión de la O.A.F., tendentes a la exacta determinación del bien productivo que, más tarde y con arreglo a las condiciones generales y particulares del contrato, será objeto de arrendamiento entre la sociedad y el usuario. Encuadradas estas relaciones previas en un contexto puramente fáctico externo al núcleo obligacional de la O.A.F., no parece dudoso que toda esa “actividad preparatoria” no implica compromiso contractual alguno ni es jurídicamente relevante para la formación y consiguiente contenido del contrato (28).

Sin embargo, en los formularios contractuales de alguna empresa española de *leasing*, es dudoso que esa relación tenga carácter previo externo a la voluntad negocial generadora del contrato de arrendamiento financiero, pues se establece que “el arrendador tomará a su cargo, mediante pedido, las especificaciones técnicas, condiciones, plazos y lugar de entrega..., de acuerdo con la oportuna nota explicativa que le haya pasado (el usuario)... (y) cursará en nombre propio el pedido a la casa productora o proveedora del material encargado”, significándose además que si el tercero no suministra de conformidad el material, “el arrendatario..., se compromete..., a liberar al arrendador de sus obligaciones de compra... (y) a subrogarse necesariamente en su lugar para el ejercicio de los derechos y obligaciones que correspondiesen al arrendador frente al vendedor del material” (29). La calificación de esta relación entre la sociedad y

(25) Véase *Derecho mercantil II*, Unidad Didáctica núm. 1, pág. 97, relacionando lo que allí se dice con las Condiciones Generales Primera a Sexta del formulario citado.

(26) Artículo 20, núm. 3 del Real Decreto-Ley. *ult. cit.*

(27) Es muy conveniente que el alumno consulte *Derecho civil II*, Unidad Didáctica núm. 5, Tema XXV, núm. 1, págs. 7 a 13, donde se desarrollan unas ideas generales sobre el arrendamiento, indispensables para el estudio de la O.A.F.

(28) Véase *Derecho mercantil II*, Unidad Didáctica núm. 1, págs. 97-98.

(29) Véanse los artículos 1709 y 1710 del Código civil y 244, 245, 246, 249, 253, 254 y 255 del Código de comercio, todos ellos en relación con los términos subrayados en el texto.

el usuario como mandato mercantil funcionalmente coordinado al negocio de arrendamiento, acaso no deba quedar completamente descartada con todas las consecuencias que ello comportaría respecto de la disciplina aplicable y efectos de un negocio de comisión inserto en la estructura jurídica de la O.A.F. (30).

La cesión del uso y disfrute de los bienes es la obligación fundamental de la sociedad que, como antes dijimos, sigue siendo propietaria de los mismos, debiendo mantener al usuario en la pacífica disponibilidad del objeto arrendado durante el tiempo de vigencia del contrato. Esta obligación se considerará cumplida cuando el usuario recibe el material encargado, previéndose, por excepción, en los formularios, que cuando el material proceda de proveedor extranjero "se entenderá realizada la entrega en el momento de recepción por parte del arrendatario de los documentos justificativos del embarque de la mercancía que figuren en el crédito documentario establecido al efecto" (31). Asimismo, se dispone en estos formularios que "una vez servido el material al arrendatario y suscrita por éste su conformidad, el arrendador concertará como contratante y beneficiario el seguro de daños a todo riesgo de dichos bienes con la compañía de seguros y en las condiciones que mejor estime" (32).

La obligación fundamental del usuario es pagar a la sociedad la renta fijada en el contrato. Esta obligación, en la práctica española, se documenta mediante letras de cambio aceptadas por el usuario a la firma del contrato y domiciliadas en el banco que designe el arrendador. Otras obligaciones del usuario son las siguientes: hacerse cargo del importe de las primas del seguro de daños a todo riesgo contratado por el arrendador; suscribir un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros derivados de la existencia o empleo del material; utilizar éste exclusivamente a los fines del negocio que explote; adoptar cuantas medidas sean necesarias para proteger el derecho de propiedad del arrendador sobre el material; pagar los gastos de instalación y conservación del mismo e informar inmediatamente al arrendador de los deterioros, averías o accidentes que se produzcan en o por dichos bienes (33).

c) *Extinción del contrato.* La causa normal de extinción es el transcurso del tiempo pactado. Al término del plazo fijado, el usuario tiene opción para devolver definitivamente el material, convenir un nuevo contrato de arrendamiento financiero sobre el mismo objeto o adquirirlo en propiedad por su *valor residual* (34). El contrato podrá extinguirse asimismo por cualquiera otras causas de las previstas para la extinción del arrendamiento en general en la medida en que éstas sean aplicables (35).

Sebastián Moll de Miguel

(30) Para comprender mejor la cuestión que aquí se plantea, véase *Derecho civil II*, Unidad Didáctica núm. 3, Tema XV, donde se remite al L.r. correspondiente, núms. 31 y 32, en relación con los contratos típicos, atípicos, mixtos y unidos.

(31) Condición General Primera, núm. 5 del formulario citado. En relación con los créditos documentarios (*Derecho mercantil II*, Unidad Didáctica núm. 2, Tema XII, núm. 4), véase L.r. núms. 688 a 697.

(32) Condición General Segunda del formulario citado; obsérvese que el arrendador tiene derecho a repercutir el importe de la prima anual que, por tanto, debe ser pagada por el arrendatario.

(33) Ensaye el alumno una sistematización de las obligaciones del usuario a que se refieren las Condiciones Generales Cuarta a Séptima del formulario citado.

(34) Ver artículo 25, uno, del Real Decreto-Ley citado.

(35) Véase en especial la rescisión prevista en la Condición General Novena en relación con los artículos 1290 y ss. del Código civil.

FORMULARIO CONTRACTUAL DE O.A.F.

En y con esta fecha, las partes comparecientes acuerdan someter la presente operación de arrendamiento a las Condiciones Generales, Particulares y Especiales, que se previenen seguidamente.

A. CONDICIONES GENERALES DE ARRENDAMIENTO

Primera.—Compra del material, cumplimiento y efectos

1. El material objeto del subsiguiente arrendamiento será elegido por el arrendatario y adquirido por el arrendador, quien tomará a su cargo, mediante el pedido, las especificaciones técnicas, condiciones, plazos y lugar de entrega de dicho material, de acuerdo con la oportuna nota explicativa que el arrendatario le haya pasado.
2. Recibida por el arrendador dicha nota explicativa, éste cursará en nombre propio el pedido a la casa productora o proveedora del material encargado.
3. El arrendador, en lo relativo al material y sus elementos componentes, no asume en el sentido más amplio, ninguna responsabilidad ni otorga al arrendatario o a terceros ninguna garantía expresa o implícita. Por lo tanto, no se hace en modo alguno responsable del buen estado del material, precio de venta, adecuación a las funciones para que estuviera destinado por el arrendatario, elección, entrega, instalación, o cualquier condición o acto con dicho material relacionado.
4. Si la casa productora o proveedora del material encargado no suministrara éste conforme a las especificaciones técnicas exigidas o faltare de algún modo en su entrega con respecto al plazo o lugar de recepción indicados, o se alegare por el arrendatario cualquier otra causa de no conformidad, éste se compromete:
 - a) A liberar al arrendador de sus obligaciones de compra, reembolsándole inmediatamente todos los pagos, gastos e intereses que hubiere soportado, y
 - b) A subrogarse necesariamente en su lugar para el ejercicio de los derechos y obligaciones que correspondieren al arrendador frente al vendedor del material, siendo de cargo del arrendatario, así subrogado, la responsabilidad de la operación y las costas y gastos que precisare su defensa judicial o extrajudicial.
5. Se considerará que el material ha sido recibido una vez esté puesto a disposición del arrendatario. Por excepción, cuando proceda de proveedor extranjero, se entenderá realizada la entrega en el momento de la recepción por parte del arrendatario de los documentos justificativos del embarque de la mercancía, que figuren en el crédito documental establecido al efecto.
6. Dentro de los ocho días siguientes a la recepción del material, el arrendatario hará llegar al arrendador, por escrito, su plena conformidad con el envío o su disconformidad. En este último caso, junto con el comunicado de disconformidad, deberá atender simultáneamente a las obligaciones previstas en los apartados 3 y 4 anteriores.

Segunda.—Seguro de daños sobre los bienes servidos

1. Una vez servido el material al arrendatario y suscrita por éste su conformidad al mismo, el arrendador concertará, como contratante y beneficiario, el seguro de daños a todo riesgo de dichos bienes con la Compañía de Seguros y en las condiciones que mejor estime.
2. Será de cargo directo del arrendador el pago de la prima, y de su beneficio la percepción de las indemnizaciones y demás derechos que derive el seguro, caso de siniestro total o parcial.
3. Los importes correspondientes a cada prima anual, los repercutirá el arrendador al arrendatario, que deberá abonar el importe de la primera prima anual en el momento de la firma del presente Contrato. Para el pago de cada una de las restantes primas anuales, el arrendatario aceptará una letra de cambio con vencimiento a un año después de la prima anterior.

Caso de producirse ulteriormente cualquier aumento en la prima de seguros, el arrendatario habrá de abonarlo contra justificante del arrendador, además de las cantidades de los efectos anteriormente señalados.
- Por excepción, cuando el importe de dichas primas experimente durante el período arrendaticio, un aumento superior al 50 por 100, el arrendatario quedará entonces libre para asegurar el material alquilado en una Compañía de su elección, de previo acuerdo con el arrendador, y por los mismos riesgos anteriormente reseñados, garantizados por la Póliza del arrendatario.
4. No obstante lo anterior, el arrendatario, como detentador del material, vendrá obligado a cumplir al respecto cuanto se le prevega en la Póliza del Seguro y en las condiciones particulares y especiales de este contrato.

5. Sin perjuicio de lo expuesto, dado que el arrendatario se hace plenamente responsable de todos los riesgos y accidentes, aun por caso fortuito o fuerza mayor, que puedan acontecer al material arrendado, quede por tal hecho obligado a completar, en su caso, la indemnización satisfecha por la Compañía de Seguros, tanto en lo que se refiere a las franquicias consignadas en las pólizas de seguro, como a las exclusiones de riesgos establecidas en las mismas. Si sobreviniera la pérdida total del material, la indemnización de la Compañía y la complementaria del arrendatario en su caso, deberán cubrir el importe de las rentas pendientes y el valor residual fijado en las condiciones particulares para el material de que se trate. Si el siniestro fuera parcial, serán de cargo de la Compañía y del arrendatario, en su caso, los gastos de sustitución o reparación del material siniestrado, y el pago de las rentas correspondientes al arrendamiento durante el periodo de tiempo exigido por la sustitución o reparación.

6. Si surgieren diferencias con la Compañía de Seguros sobre la procedencia y monto de las indemnizaciones, caso de siniestro, podrá defenderlas también directamente el arrendatario, a cuyo efecto se le reconoce suficiente legitimación ante la Compañía de Seguros, pero ello no le descargará, frente al arrendador, de la responsabilidad complementaria prevista que haya de satisfacer a éste, sin perjuicio de su acción contra la Compañía de Seguros por el importe diferencial en controversia.

Tercera.—Seguro de Responsabilidad civil

1. A partir de la fecha de recepción conformado del material y hasta el fin del periodo de arrendamiento, el arrendatario, en su calidad de detentador y usuario del material arrendado, será responsable de los daños que la existencia o empleo del mismo ocasione a terceros, en sus personas o bienes, aunque estos daños derivasen de vicio de construcción o de defectos de montaje.

2. El arrendatario suscribirá al efecto, cerca de su Compañía de Seguros, la correspondiente póliza garantizando su Responsabilidad civil como Empresario, detentador y usuario del material arrendado.

3. Será de cargo del arrendatario el pago de las primas, que, asimismo, sufragarán la cobertura del riesgo del arrendador, como asegurado adicional, en su calidad de propietario del material.

Cuarta.—Entrada en vigor del Arrendamiento

1. En la misma fecha en que se suscriba por el arrendatario la recepción conforme del material o en el momento de la recepción por parte del arrendatario de los documentos justificativos del embarque de la mercancía que figuren en el crédito documentario establecido al efecto, entrará en vigor el presente contrato de arrendamiento de dichos bienes, junto con el Seguro de daños y el de Responsabilidad civil, y conforme a las condiciones especiales siguientes.

2. A la renta estipulada en las condiciones particulares, se añadirán todos los impuestos actuales o de futuro correspondientes, y el importe total se abonará mediante letras aceptadas por el arrendatario, salvo la primera renta, que se pagará por cheque.

3. El importe de la renta se abonará mensual o trimestralmente, por anticipado, a contar desde la fecha de la entrada en vigor del arrendamiento, donde se reseñarán las fechas y lugar del pago.

4. La primera renta será exigible tan pronto se firme el certificado de conformidad del material por el arrendatario o en el momento de la recepción por parte del arrendatario de los documentos justificativos del embarque de la mercancía, que figuren en el crédito documentario establecido al efecto.

El pago de las demás rentas se efectuará mediante presentación, por parte del arrendador, de efectos domiciliados en el banco que designe el arrendatario. Dichos efectos serán aceptados por el arrendatario a la firma del presente contrato.

5. En caso de retraso en los pagos, el arrendador podrá girar el cargo por interés de demora de las rentas devengadas al tipo del 1 por 100 mensual, además de exigir el reembolso de los gastos que le ocasionen los avisos de vencimientos y los requerimientos de pago y actuaciones de protesto.

6. Para el pago de las rentas, operado a través de la expedición y aceptación de letras de cambio, el arrendatario reconoce, como aceptante de las mismas, que ha obtenido suficiente previsión causal, justificante de las cambiales, con la recepción conforme del material y con la deuda contraída, por ello, de las rentas del arrendamiento.

Quinta.—Instalación, conservación y verificación del material

1. En las condiciones particulares del arrendamiento se determinará exactamente el lugar en que haya de ser instalado el material. El transporte y la instalación se harán con sujeción a las instrucciones que puedan dar el fabricante o proveedor y el arrendador, las cuales podrán referirse también e obligarán al arrendatario, a las condiciones y calidades de los accesorios, elementos, materiales complementarios y fuerza motriz que sean precisos para la puesta en funcionamiento del material arrendado.

2. Los gastos de transporte e instalación, así como el suministro de cuantos accesorios, elementos, materiales complementarios y fuerza motriz sean necesarios, serán por cuenta del arrendatario, y, del mismo modo, los impuestos, derechos arancelarios y arbitrios que por cualquier causa se originen.

3. Una vez que el material haya sido instalado, el arrendatario lo pondrá en conocimiento del arrendador, el cual podrá realizar las comprobaciones e inspecciones que estime oportunas.

4. El arrendatario deberá observar las prevenciones de las Leyes, Reglamentos y Ordenanzas concernientes a la detentación, transporte, instalación y utilización del material arrendado.

5. Caso de desmontaje, traslado y reinstalación, necesitará autorización del arrendador y se atenderá igualmente a las normas preindicadas 1, 2, 3 y 4.

6. Las piezas, equipos y accesorios que se incorporen al material arrendado durante el curso del arrendamiento quedarán en beneficio y de la propiedad del arrendador, sin que el arrendatario pueda retirarlas al devolver el material, ni exigir al arrendador reembolso alguno ni indemnización compensadora.

7. El arrendador o cualquier persona que éste designe tendrá, en todo momento, la facultad de inspeccionar la instalación, conservación y utilización del material. Podrá, asimismo, constatar y revisar todas las reparaciones, reposiciones o incorporaciones de elementos que se hagan. A tal efecto, el arrendatario se obliga a facilitar a aquéllos el acceso a los locales e instalaciones y a comunicar al arrendador, inmediatamente que se produzca, cualquier deterioro, avería o destrucción del material, así como todo accidente causado por o con éste.

Sexta.—Utilización del material

1. El material sólo podrá ser usado por el arrendatario o por sus dependientes o empleados, bajo la inmediata y directa responsabilidad de aquél, destinándolo exclusivamente a los fines del negocio que explote. En consecuencia, tiene prohibida la transferencia de su detentación o uso por cualquier forma o modalidad (subarriendo, cesión, permuta, préstamo, prenda, garantía, aportación social, traspaso de la empresa o de su fondo de comercio, etc., etc.), bien sea a título oneroso o gratuito.
2. En la utilización del material, el arrendatario se compromete a observar las prevenciones de las Leyes, Reglamentos y Ordenanzas vigentes, siendo de su cargo los impuestos y arbitrios que graven la explotación de dichos bienes.
3. El arrendatario se obliga a utilizar el material arrendado con la diligencia y cuidado que su destino exija, debiendo soportar los gastos necesarios para el empleo del mismo y los relativos a los de su mantenimiento y reparación.
4. El arrendador no responde en ningún caso de la bondad del material servido, ni garantiza de ningún modo el buen funcionamiento del mismo, ni asegura su rendimiento, pero sí se compromete a subrogar al arrendatario en la garantía que otorgue el fabricante o proveedor al comprador, cediéndole a tal fin los derechos que en este orden puedan corresponderle, autorizándole en tal caso para dirigirse directamente a dicho fabricante e incoar por su cuenta contra éste las reclamaciones pertinentes. Sin embargo, será requisito previo al ejercicio de estos derechos, comunicar su propósito al arrendador, quien podrá, si así lo desea, ser él quien intervenga en la reclamación, en cuyo caso el arrendatario deberá abstenerse de toda actuación.
5. Del mismo modo, el arrendatario tampoco podrá pretender liberación o disminución de la renta, ni solicitar indemnización alguna, ni resolver el contrato de arrendamiento, por no poder utilizar el material una vez servido y suscrita la conformidad, cualquiera que fuese la causa a que obedezca tal falta de uso, ni aun en el supuesto de suspensión de uso por siniestro o reparaciones.

Séptima.—Propiedad del material. Su constancia o registro. Efectos

1. El material adquirido es siempre, y en todo momento, de la propiedad exclusiva del arrendador. De consiguiente, el arrendatario, que mientras dure el arrendamiento, no tiene sobre él más que la cualidad de detentador con derecho conexo de uso, se obliga, con carácter general, a adoptar a su costa cuantas medidas sean necesarias para proclamar, respetar y hacer respetar a terceros tal derecho de propiedad.
2. El arrendador se reserva, en su posición de propietario, la posibilidad de aceptar, como garantía de sus diversas operaciones, tanto el material arrendado como las sumas que le fueren debidas por el arrendatario.
3. El arrendatario se obliga al registro del material objeto del arrendamiento. Como titular de la Empresa que recibe el material en explotación, habrá de declarar a la Delegación de Industria y al Ayuntamiento del municipio donde radique, la existencia en su Empresa de tales bienes de arrendamiento, tanto para la reglamentaria acta oficial de puesta en marcha, como para la inscripción de ellos en el Censo Industrial, así como para la verificación y licencia municipal, consignándose en dichos documentos que la propiedad de los bienes pertenece al arrendador.
4. Sin perjuicio de lo anterior, el arrendatario se compromete:
 - a) A fijar sobre el material y en sitio perfectamente visible una placa inamovible, facilitada por el arrendador, donde se indique que tales bienes son de propiedad de éste.
 - b) A mantener, asimismo, perfectamente legibles, todas las inscripciones relativas a la identificación del material.
 - c) A defender el material de cualquier pretensión de embargo de tercero, tomando a su costa todas las medidas necesarias para su evitación o levantamiento, a fin de hacer valer el derecho de propiedad del arrendador, quien deberá ser notificado inmediatamente de cualquier clase de actuación.
 - d) Si el material se instalase en local no propio del arrendatario, éste se obliga a obtener del dueño de dicho local el reconocimiento por escrito de que los bienes instalados en él pertenecen en propiedad al arrendador, y la autorización permanente, mientras dure el arrendamiento, para que el arrendador tenga entrada libre en el local y le sea permitido disponer sobre tales bienes conforme al presente contrato, cuyo reconocimiento y autorización serán entregados al arrendador a sus efectos.

Octava.—Fin normal del arrendamiento

1. El contrato de arrendamiento terminará inexorablemente el día prefijado en las condiciones particulares y sin necesidad de requerimiento previo ni aviso alguno, con renuncia expresa a lo establecido en el artículo 1.566 del Código Civil.
2. Al término del plazo, el arrendatario tendrá opción para:
 - a) Devolver definitivamente el material al arrendador.
 - b) Convenir un nuevo contrato de arrendamiento, o
 - c) Adquirir el material arrendado.
3. En el primer supuesto, basta rendir la entrega del material en el lugar y con las condiciones que determine el arrendador, siendo de cuenta del arrendatario los gastos que origine su restitución.
Si el arrendador no recibiera el material de conformidad, por apreciar en él un desgaste superior al normal, habida cuenta del uso pactado, podrá solicitar la correspondiente indemnización compensatoria. De no ser aceptada por el arrendatario, cada parte designará un perito tasador, y, de no haber coincidencia, resolverá la tasación un tercer perito dirimente, designado por ambas partes, a cuya decisión se someterán expresamente.
4. En el segundo caso, arrendador y arrendatario convendrán el plazo, rentas y demás condiciones que proceda aplicar al nuevo contrato de arrendamiento.
5. En el tercer supuesto, el precio de venta será el que aparezca determinado en las condiciones particulares como valor residual, y su pago se hará al contado.

Novena.—Fin anormal del arrendamiento. Resolución

1. Dentro del periodo de su vigencia, el arrendador podrá decidir por sí solo la resolución de pleno derecho del arrendamiento si ocurre alguna de las siguientes causas:
 - a) La falta de pago en la fecha de su vencimiento de cualquiera de las rentas periódicas pactadas, de las primas del seguro repercutidas, o de las letras de cambio que respectivamente las representen, o

- b) El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones asumidas por el arrendatario.
- 2. Caso de resolución por alguna de las causas preindicadas, corresponderá al arrendador:
 - La exigencia de las rentas devengadas hasta ese momento, con la ejecución de las letras de cambio pendientes de pago para su inmediata y definitiva percepción. Cualquier retraso en el pago devengará el 1 por 100 mensual. Cada mes iniciado devengará el interés anterior.
 - La recuperación del material que deberá ser reintegrado al lugar que designe el arrendador, con gastos a cargo del arrendatario.
 - La indemnización por el deterioro del material que exceda de un uso normal, determinable conforme al apartado 3 de la condición octava.
 - Y el abono por el arrendatario, en concepto de cláusula penal, de una de estas dos cantidades, a elección del arrendador: el 25 por 100 del importe del material según factura del fabricante o proveedor; o el importe representativo de los seis periodos mensuales o dos trimestrales siguientes a la resolución.
- 3. La resolución por alguna de las causas preindicadas, acordada por el arrendador, podrá ser comunicada al arrendatario directamente por escrito, o por conducto notarial, expresándose las indicaciones que señale el arrendador en orden al estado y rescate de los bienes, al efecto de documentar la resolución para el ejercicio de cualquier acción judicial, cuyas costas y gastos serán de cargo del arrendatario.
- 4. No obstante lo establecido en los apartados anteriores, y sin perjuicio de las responsabilidades que en los mismos se definen ante cualquier supuesto de impago e incumplimiento de las obligaciones relativas al arrendatario, el arrendador queda autorizado para entrar en los locales donde los bienes radiquen y para hacerse cargo de los mismos sin necesidad de previa declaración o mandato judicial, lo cual podrá llevar a cabo por sus propios medios, sin intervención de autoridad alguna y sin justificación de ninguna clase, renunciando el arrendatario expresamente y desde ahora a oponerse de algún modo y por cualquier medio de acción o excepción, hasta las interdictales, a la actuación del arrendador en tal sentido.
- 5. La resolución recaerá de pleno derecho en caso de siniestro total del material arrendado, procediéndose entonces conforme previenen los apartados 5 y 6 de la condición segunda.
- 6. El arrendatario reconoce expresamente, desde ahora, que todas las letras de cambio por él aceptadas en beneficio del arrendador, son ejecutables, en caso de resolución del arrendamiento, aplicación de la cláusula penal o exigencia de responsabilidad complementaria por siniestro total del material arrendado, al estar legitimadas con suficiente provisión a efectos de fuerza ejecutiva.

Décima.—Gastos e impuestos del contrato

Serán de cuenta del arrendatario todos los gastos, impuestos y arbitrios que incidan en o se deriven del presente contrato.

Undécima.—Jurisdicción y competencia

Para toda cuestión, duda o diferencia que surja en la interpretación y ejecución del presente contrato, ambas partes, con renuncia expresa a su fuero propio, se someten a la jurisdicción y competencia de los Tribunales de

En a de de 197

B. CONDICIONES PARTICULARES DE ARRENDAMIENTO

- I. El material que, conforme al presente contrato, alquila al arrendatario es el siguiente:
- II. La fecha límite para servir el material al arrendatario es la de Pasado dicho término, las partes resolverán de mutuo acuerdo sobre la vigencia del presente contrato, en atención a las variantes que puedan ser convenidas con el fabricante o proveedor.
- Si el material a servir es de procedencia extranjera, la fecha límite se referirá a la entrega al arrendatario, aceptada por éste, de los documentos justificativos del embarque de la mercancía, que figuren en el crédito documentario establecido al efecto.
- III. El material será instalado en:

IV. El arrendamiento entrará en vigor según previene la condición Cuarta de las Condiciones Generales y terminará después de la fecha de pago de la primera renta.

V. El presente arrendamiento se atenderá mediante el devengo y pago de rentas, conforme al siguiente cuadro:

PERIODOS	RENTA NETA UNITARIA	I.T.E. Y DEMAS TRIBUTOS	RENTA TOTAL UNITARIA

Según el cuadro anterior, el importe de las rentas netas asciende a:
y el I.T.E. y demás tributos a:
resultando la suma global de:

VI. La primera renta será pagada con cheque del arrendatario el mismo día en que éste firme el Acta de entrega del material y reciba los documentos justificativos del embarque de la mercancía, que figuren en el crédito documentario establecido al efecto.

El pago de las restantes rentas se hará contra las letras de cambio, aceptadas por el arrendatario y, en su caso, avaladas por
..... domiciliadas en el Banco

El cambio de domiciliación bancaria sólo podrá hacerse con autorización de la Compañía.

Al ser anticipado el devengo y pago de las rentas, las fechas de vencimiento de sus letras de cambio correlativas serán la del primer día de cada período.

VII. Las rentas indicadas en el apartado V y el valor residual fijado en el apartado VII, serán revisables en función de la posible diferencia del precio del material entre la presente fecha y la de su facturación definitiva, bien entendido que el precio de referencia en el día de hoy se cifra en:

Después de este ajuste, las rentas se mantendrán invariables, salvo modificación del I.T.E. o de los demás tributos, en cuyo caso las partes resolverán de común acuerdo la corrección procedente, habida cuenta de los cargos y beneficios respectivos en las Condiciones Generales.

IX. El seguro de daños a todo riesgo del material servido será garantizado por póliza de Seguros suscrita por el arrendador.

El importe de la prima, según tarifa, lo repercutirá el arrendador al arrendatario según queda consignado en la Condición Segunda, párrafo tercero de las condiciones generales de arrendamiento del presente contrato.

X. En observancia de la Condición Tercera de las Condiciones Generales, el arrendatario asegurará su responsabilidad civil y la adicional del arrendador, en la Compañía de Seguros por él designada siendo por su cargo y cuenta el coste de la prima.

XI. El presente contrato deberá ser devuelto, debidamente firmado por el arrendatario, en el plazo de
a contar desde el

Con sus ejemplares, firmados, acompañará un cheque del 25 por 100 de la primera renta a título de provisión, que se tomará a cuenta de la misma, si el arrendamiento entre en vigor, quedando en otro caso a disposición del arrendador, para gastos de expediente.

Pasado el plazo anteriormente previsto sin que el arrendatario devuelva firmados los ejemplares del contrato, el arrendador quedará librado de toda obligación.

En prueba de conformidad, suscriben el presente documento en el lugar y fecha al principio expresados.

EL ARRENDATARIO,
(firma y sello)

EL ARRENDADOR.

Por Aval.